

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

E.A.P. DE SOCIOLOGÍA

**Los Movimientos cocaleros y las políticas públicas en la
lucha antidrogas del Perú, el caso del Valle del Río
Aguaytía: 2001-2004**

TESIS

para optar el título profesional de Licenciado en Sociología

AUTOR

Demetrio Laurente Eslava

ASESOR

Sinesio López Jiménez

Lima – Perú

2010

Reconocimientos

Esta tesis no habría sido posible sin el apoyo financiero de la institución SEPIA (Seminario Permanente de Investigación Agraria). El proyecto de tesis resultó uno de los ganadores del SEPIA XI desarrollado en Trujillo. Agradezco a la asesoría brindada de mi amigo, Ricardo Soberon Garrido conocedor del tema, con quien discutimos en muchas ocasiones no sólo sobre mi texto sino muchas otras curiosidades intelectuales que compartimos como investigadores. Así mismo agradezco a Robert S. Jansen, Patricia Zarate, Ramón Pajuelo, Eduardo Zegarra, quienes me dieron sugerencias para mejorar el texto. A la vez agradezco a Tania Vasquez Luque, mi querida amiga de siempre, quien me apoyo mucho en mejorar el texto, ella siempre me está impulsando y dando aliento para investigar. Agradezco a Edwuard Cruz, amigo de la maestría de la PUCP, y a mi hermano querido, Hugo Laurente Eslava. Por último agradezco a mis amigos dirigentes cocaleros: Orbil Matta Aliviar, Yenica Marquina, Flavio Sánchez, Basilio Chavez y Cresencio Ramos.

Agradezco al maestro Sinesio López Giménez por asesorar la tesis en las clases de Seminario de Tesis I y II en la maestría de la PUCP, y quien siempre ha sido un ejemplo para las generaciones sanmarquinas como profesional y como persona.

INDICE

Introducción.....	i
-------------------	---

Capítulo I: Aproximaciones Teóricas y Contexto de Estudio.

1.1.- Aproximaciones Teóricas Sobre Movimientos Sociales y Políticas Públicas	
1.1.1.- Debate Teórico Sobre los Movimientos Sociales.....	1
1.1.2.- La Política Pública de la Política Antidroga.....	13
1.2.- Metodología de la Investigación.....	17
1.3 .- Contexto de la Zona de Estudio.....	21

Capítulo II: La Política Pública en La Lucha Antidroga: Desarrollo Alternativo y Erradicación.

2.1.- La Lucha Antidroga Durante el siglo XX en el Perú.....	25
2.2.- El Desarrollo Alternativo: Una Visión Prometedora al Problema de la Coca.....	27
2.2.1.- Los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) en Aguaytía: Huicoca y Shambillo.	
2.2.1.1 Huicoca.....	29
2.2.1.2.- Shambillo.....	33
2.2.2.- Compromisos incumplidos por DEVIDA-CHEMONICS.....	34
2.3.- La Erradicación: Reducción de coca a costa de todo.....	38

Capítulo III: La Asociación Cocalera de Aguaytía.

3.1.- Antecedente de la Asociación de Cocaleros de Aguaytía.....	40
--	----

3.2.- La Formación de la Asociación de Cocaleros de Aguaytía: La Erradicación como Factor Desencadenante de su Historia.....	44
3.3.- Estructura de la Asociación de Cocaleros: entre la verticalidad y la horizontalidad de las relaciones dirigencia-base.....	46
3.4 .- Las Asambleas: Espacios Simulados de Deliberación.....	50
3.5.- La Participación en la Asociación.....	52
3.5.1 La evolución de la participación de las comunidades en la Asociación.....	55

Capítulo IV : Participación y Ciclo de Protesta del Movimiento Cocalero de Aguaytía.

4.1.- La Participación en la Acción Colectiva.....	57
4.2.- Ciclo de Protesta del Movimiento Cocalero de Aguaytía.....	61
4.3.- La Movilización Cocalera: 2000-2004.....	64
4.3.1.- La Trayectoria del Movimiento Cocalero de Aguaytía Durante el Gobierno de Fujimori.....	67
4.3.2.- La Trayectoria del Movimiento Cocalero de Aguaytía Durante el Gobierno de Paniagua.	
4.3.2.1.- La Movilización Cocalera del 7 de mayo del 2001.....	79
4.3.3.-La Trayectoria del Movimiento Cocalero de Aguaytía Durante el Gobierno de Toledo.	
4.3.3.1.- La Movilización Cocalera del 27 de noviembre del 2001.....	91
4.3.3.2.- La Movilización Cocalera del 26 de junio del 2002.....	98
4.3.3.3.- La Movilización Cocalera del 18 de febrero del 2003.....	105
4.3.3.4.- La Movilización Cocalera del 20 de abril del 2004.....	111
4.3.3.4.1.- La Marcha Hacia Lima.....	115
CONCLUSIONES.....	124
BIBLIOGRAFIA.....	128

Abreviaciones

ADA	Autoridad Autónoma para el Desarrollo Alternativo
CTAR	Consejo Transitorio de Administración Regional
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
COCEPU	Comité Central de Palmicultores de Ucayali
CODESU	Consorcio para el Desarrollo Sostenible de Ucayali
CONPACCP	Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú
CORAH	El Proyecto Especial de Control y Reducción de Los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga
CONTRADROGAS	Comisión de Lucha Contra El Consumo de Drogas
DEVIDA	Comisión Nacional para El Desarrollo y Vida Sin Drogas
ENACO S.A	Empresa Nacional de La Coca
FIA	Fundación Hondureña para La Investigación Agraria
INADE	Instituto Nacional de Desarrollo

PDA	Programa de Desarrollo Alternativo
PDAP	Programa de Desarrollo Alternativo Participativo
PCP	Partido Comunista Peruano
PEAH	Proyecto Especial del Alto Huallaga
PIP	Policía de Investigaciones del Perú
SUTEP	Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú
SL	Sendero Luminoso
UMOPAR	Unidad Móvil de Patrullaje Rural
SINAMOS	Sistema de Apoyo a la Movilización Social

Introducción

En estos tiempos, cuando las políticas antidrogas en América Latina vienen siendo cuestionadas por su ineficacia, es necesario preguntarse: ¿cuál es el nivel de relación de estas políticas con el surgimiento de los movimientos cocaleros en el Perú, en el valle de Aguaytía, durante el período 2000-2004? ¿Han influido o están influyendo estos movimientos sociales en la elaboración de esas políticas? Y, ¿en qué condiciones ha ocurrido o viene ocurriendo?

A partir de estas reflexiones, nos propusimos como objetivo: analizar los tipos de interacciones entre la aplicación de la Política Antidroga del gobierno peruano y el accionar de los movimientos cocaleros.

La influencia de las acciones colectivas del movimiento cocalero en las políticas antidrogas, del 2000 al 2004, ha sido mínima. Las razones pueden ser múltiples, pero centrémonos en las principales. En primer lugar, la resistencia del gobierno a redefinir una política antidroga que, gracias a la interferencia de Estados Unidos, pone el acento en la

represión antes que en considerar otras opciones viables como los Programas de Desarrollo Alternativo. En segundo lugar, los agricultores cocaleros, a través de sus acciones colectivas, no han tenido la suficiente capacidad de presión sobre los gobiernos, pues primaron los intereses de corto plazo, como la paralización de la erradicación, en lugar de apostar por los cambios profundos, como el reconocimiento de la legalidad del cultivo de la hoja de coca, situación que podría darle un giro trascendental a la Política Antidroga.

Si bien es cierto que las acciones de los cocaleros no han afectado la política antidroga, ésta, por el contrario, sí ha favorecido el resurgimiento y el fortalecimiento del movimiento cocalero. Tanto la política antidroga centrada en la represión (erradicación forzada), como los ineficientes resultados de los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA), son funcionales a la dinámica del movimiento cocalero.

Nuestro trabajo se inicia con el debate teórico de las diferentes perspectivas analíticas que han problematizado el tema de los movimientos sociales. Presentamos las posturas de los clásicos y de tres corrientes contemporáneas que han intentado explicar la dinámica de la acción colectiva. Posteriormente, presentamos el contexto geográfico y el proceso de cambio socio-demográfico que experimenta la zona en donde se desarrolla el movimiento cocalero de Aguaytía. En la primera parte, describimos el proceso de aplicación de la Política Antidrogas: los

Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) y el programa de erradicación, sus características y resultados.

En la segunda parte, analizamos a la organización cocalera del valle de Aguaytía, presentamos brevemente sus antecedentes y los factores que intervinieron en su aparición. Realizamos un análisis exhaustivo, tanto de su estructura interna como de la dinámica de la relación entre la dirigencia y los agricultores en los espacios de debate.

En la tercera parte, explicamos las razones ocultas detrás de la participación de los agricultores cocaleros en las acciones colectivas. Describimos en detalle las movilizaciones del movimiento cocalero en el período 2000-2004 y utilizamos la teoría de la estructura de oportunidades políticas (EOP) para explicar los condicionamientos que enmarcan al sistema político y posibilitan la acción colectiva de dichas movilizaciones. Así, las variables propuestas por Tarrow: disponibilidad de aliados, alineamientos electorales y cohesión de la élite, servirán para analizar los elementos coyunturales que influyen en la acción colectiva; mientras que las variables “distribución del poder político”, “sistema electoral y de partidos” y “legislación para el control de protestas”, propuestas por Favela, se utilizarán para analizar la estructura institucional que influye en la acción colectiva del movimiento cocalero de Aguaytía.

CAPITULO I

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y EL CONTEXTO DE ESTUDIO

1.1 Aproximaciones Teóricas Sobre Movimientos Sociales y Política Pública.

1.1.1.- Debate Teórico Sobre los Movimientos Sociales.

Existen diferentes perspectivas de análisis sobre los movimientos sociales y, por tanto, diferentes definiciones de lo que es un movimiento social. Entonces, cómo saber cuándo un congregado de individuos, que participa en una movilización, puede considerarse como un movimiento social, cuáles son las variables que imperan en su accionar, sus valores, sus normas y sus estructuras organizativas.

Examinaremos las diferentes concepciones teóricas que se han utilizado para estudiar los movimientos sociales, desde los clásicos, que trataron de entender estas acciones colectivas en función de los estados de ánimo (irracionales), hasta los contemporáneos que enfatizan la racionalidad de los actos, en los elementos culturales y simbólicos, como la Teoría de la

Movilización de Recursos (TMR) o la Teoría de la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP), las cuales enfatizan en los cálculos racionales de costo y beneficio para la consecución de una acción. Finalmente, examinaremos la postura de los autores que prefieren hablar de Nuevos Movimientos Sociales (NMS), los cuales plantean la emergencia de un nuevo actor, con una identidad y una racionalidad propia.

Dentro de la teoría clásica encontramos al interaccionismo simbólico y al estructural-funcionalismo. La primera corriente es desarrollada por la Escuela de Chicago, cuyos principales representantes son Robert Park y Herbert Blummer; mientras que, en el estructural funcionalismo, tenemos a Parsons, Merton y Smelser.

En su obra “El Sistema Social”, Talcott Parsons no trata puntualmente la acción colectiva ni los movimientos sociales; sin embargo, plantea el tema de las conductas desviadas. Sostiene que la desviación es una acción y no una simple respuesta conductual determinada por las fallas en el proceso de interiorización individual de las pautas y normas sistémicas.

En tanto que Robert Merton reflexiona con mayor detenimiento en por qué los individuos no internalizan las normas y por qué las sociedades no llegan a integrarse. El análisis de la anomia daría la explicación del caso.

Por su parte, Neil Smelser sostiene que el comportamiento colectivo en una movilización tiende a redefinir el curso de la acción social a través de las creencias generalizadas. En su texto “Teoría del Comportamiento Colectivo”, Smelser plantea una serie de tipologías para explicar cómo se produce el comportamiento colectivo. Así, para él cuando se agudiza la tensión entre los componentes de la acción social, el individuo cuestiona los valores y las normas establecidas, debido a que éstas ya no satisfacen sus expectativas. Según esta perspectiva, las acciones colectivas se definen como respuestas que son procesadas en el sistema con la finalidad de volver al orden.

La propuesta de Smelser es abstracta y general. Ello impide conocer, por ejemplo, cuáles son o en qué esfera se ubican las características estructurales que condicionan las respuestas a las tensiones y cuáles son los patrones que definen cierto tipo de acción. No obstante, logra definir dos categorías: la acción social y el control social, aunque no llega a relacionarlas con la situación de conflicto (Tarrés: 1992, 741).

Dentro del interaccionismo simbólico, Herbert Blummer plantea que el comportamiento colectivo es una nueva forma de acción, que se diferencia del comportamiento normal y que funciona como factor decisivo para el cambio social. Esto significa una ruptura con las formas establecidas de comportamiento en la vida cotidiana, donde aparecen necesidades o situaciones que, al no poder satisfacerse o explicarse con las definiciones culturales existentes, producen un malestar que se

comunica, se socializa y puede generar nuevas formas de comportamiento de significados de expresión (Tarres: 1992, 12).

Park entiende el comportamiento colectivo como un elemento fundamental y cotidiano, e incluso patológico, en tanto propicia el cambio, pero que es parte consustancial del funcionamiento de la sociedad. En última instancia, se trata de un comportamiento que se desvía pero que necesariamente debe llegar a institucionalizarse.

Esta perspectiva se equivoca al sobredimensionar o privilegiar la motivación individual del actor como determinante de sus acciones, sin tomar en cuenta otros factores, como —por ejemplo— las relaciones de clase. No da cuenta del modo en el cual los actores se apropian de los recursos simbólicos ni cómo es que éstos son producidos.

Dentro del interaccionismo simbólico, ubicamos a la Teoría de la Elección Racional (TER). ¿Qué es lo que motiva a los individuos a participar en la acción colectiva, según esta corriente teórica? Es el cálculo de la maximización de los beneficios a un costo mínimo de acción y la interpretación que realiza el individuo sobre la base de este cálculo. La visión de la TER sobre los movimientos sociales plantea la racionalidad e instrumentalidad de las acciones colectivas.

Dentro de esta corriente, ubicamos a Mancur Olson y su trabajo “The Logic of Collective Action” (1992), donde sostiene que la participación de los individuos en la acción colectiva es consecuencia de una decisión individual, la cual va estar sujeta a un análisis de costos y beneficios (*racionalidad estratégica*), teniendo siempre en cuenta el tamaño del grupo, puesto que, mientras más grande sea éste, la posibilidad de participar será más complicada.

Olson resuelve el problema del *free rider* (personaje que trata de beneficiarse de la acción de los otros) a través de los incentivos selectivos (bienes privados que se otorgan para impulsar la acción colectiva); sin embargo, estos incentivos solo son pensados como bienes de tipo material y/o económico, sin tomar en cuenta los bienes inmateriales: estados emocionales, valores culturales y compromisos; además, supuestamente, sólo existiría un único tipo de lógica imperante en los individuos, dejando de lado otros tipos de lógica, como la solidaridad y la reciprocidad.

En contraposición a las teorías que enfatizan el cálculo costo beneficio como fundamento de la acción colectiva, aparece la propuesta de la Teoría de Movilización de Recursos (TMR), cuyo interés principal radica en los recursos que requieren las acciones colectivas para el logro de sus objetivos. Esta postura teórica no se preocupa por los factores que motivan a los individuos a participar ni tampoco se pregunta si los comportamientos son racionales o irracionales; no se interesa en el por

qué de los movimientos sociales, sino más bien en el cómo. Dentro de esta perspectiva se encuentran Mc Carthy y Zald (1977), que se concentran en la “organización” como elemento central de los movimientos, definiendo la acción colectiva como una organización compleja, formal, que se identifica con las del movimiento social e intenta hacer realidad sus objetivos. Esta organización es análoga a la de una empresa, a la cual denomina como Organización del Movimiento Social (MSO), que es la instancia estratégica donde se administran los recursos de la acción y las expectativas difusas se transforman en reivindicaciones (Neveu: 2000).

No obstante, al identificar “organización” con “acción colectiva”, estamos invalidando cualquier otro tipo de acción colectiva, en la cual no se haga visible la organización. Creemos que una acción colectiva es más que la organización de la misma. Puede existir una organización, pero si ésta no asume una acción colectiva, no podríamos afirmar la existencia de un movimiento social.

La Teoría de la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) va en la misma dirección que la TMR, al considerar a la acción colectiva como producto de la interacción estratégica de los actores, basada en el cálculo de costos y beneficios.

Desde esta lógica, Charles Tilly (1973) demuestra la importancia del proceso político en los cambios que se producen en las formas de

violencia y de acción colectiva. Establece la relación de dependencia entre la violencia y los cambios políticos, a través de la cual explica los movimientos sociales. Esta interacción de actores, con el Estado y entre sí, comienza a tener un carácter estratégico cuando la acción colectiva presenta demandas que el Estado no puede para por alto, por lo cual, debe modificar sus respuestas o, en su defecto, recurrir a la represión.

De otro lado, según la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, todo movimiento social debe ser entendido como un proyecto colectivo, donde es de vital importancia la cultura, la ideología y la construcción de identidades colectivas. Touraine (1985) plantea que las acciones colectivas no pueden ser entendidas como una simple lucha de clases que pugnan por el poder, sino más bien como la búsqueda de una identidad que se construye a partir de lo cultural y lo simbólico. También Melucci (1989), estudioso del “paradigma de la identidad”, afirmaba que, sin una identidad, la acción carece de sentido, por lo tanto, la construcción de la identidad colectiva es condición previa para la formación de todo movimiento social.

Luego de esta recapitulación de las teorías que han tratado de explicar la acción colectiva y los movimientos sociales, estamos en condiciones de especificar a qué nos referimos en esta investigación cuando hablamos de un movimiento social. Siguiendo a Tarrow, un movimiento social, para ser considerado como tal, debe tener dos características principales:

1.- Debe desafiar la actividad de otros, es decir, interrumpir, obstruir o introducir incertidumbre en la acción de los demás. Usualmente, en las movilizaciones cocaleras, esto es evidente: por un lado, son afectados los agricultores que no siembran coca, que se dedican a otros cultivos y comparten el mismo espacio; por otro lado, son afectados el Estado y sus programas.

2.- En todo movimiento social, los participantes deben compartir objetivos y valores comunes, lo cual permite crear lazos de solidaridad entre ellos. Por ejemplo, identificarse como agricultor más que como cocalero o como el individuo que es débil frente al Estado, va generando una cierta identidad que es utilizada en las acciones colectivas.

Entonces, un movimiento social se define por las acciones colectivas que se fundan a partir de desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad, en su interacción con las élites, los oponentes y las autoridades (Tarrow: 1997, 21).

Para el análisis específico del movimiento cocalero, los desafíos colectivos no sólo se hacen a nivel de las movilizaciones, sino de las diferentes interacciones que ha tenido el movimiento con el Estado. Esta interacción se da con dos tipos de actores:

a) Con los funcionarios de rango medio, vinculados al cultivo de la hoja de coca, la relación es continua y conflictiva.

b) Con los funcionarios de alto rango, como el Presidente del Consejo de Ministros o con el mismísimo Presidente de la República, la relación es de concertación y de acuerdos formales.

Nos centraremos en la propuesta de Tarrow sobre los movimientos sociales, la cual considera las oportunidades políticas como dimensiones consistentes del entorno político, que proporcionan incentivos para la acción colectiva al influir sobre las expectativas de éxito o fracaso de la gente (Tarrow: 1998). Esta mirada nos permite indagar el “cuándo” de una acción colectiva, es decir, cómo perciben los movimientos sociales la apertura o el cierre del “sistema político” para decidir el inicio o la postergación de una acción colectiva.

De acuerdo a Tarrow, en un sistema político se van a encontrar elementos que son variables o coyunturales:

a.- Disponibilidad de aliados: La posibilidad de conseguir el patrocinio de un miembro poderoso que apoye al movimiento con recursos o de otros aliados funcionales que apoyen sus demandas.

b.- Alineamientos electorales: La inestabilidad de las lealtades electorales y la cambiante variación de las coaliciones partidarias son incentivos para la acción colectiva.

c.- Cohesión de la élite: Cuando las élites políticas se encuentran unidas, las demandas de los movimientos se enfrentan a una situación cerrada; por el contrario, las élites divididas incentivan a la acción colectiva (Tarrow: 1997, 156).

Favela (2002) sostiene que los elementos permanentes o estructurales, que tienen que ver con la estructura institucional del sistema político, deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar las oportunidades que brinda el sistema a la acción colectiva. De este modo, podremos diferenciar el desarrollo de los movimientos cocaleros según el tipo de régimen político vigente, si es democrático (gobierno de Paniagua y Toledo) o autoritario (gobierno de Fujimori). Las variables propuestas por Favela son las siguientes:

a.- Distribución del poder político: El sistema es abierto a los MS cuando existe una distribución equilibrada del poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; cuando existe una estructura descentralizada, con autonomía de cada instancia de gobierno. Por el contrario, la existencia de una estructura centralizada desfavorece los MS.

b.- Sistema Electoral y de Partidos: Está relacionado con la efectividad de los procesos electorales, a través de los cuales los ciudadanos eligen a sus gobernantes y los funcionarios son sometidos al escrutinio de los votantes. También está relacionado con el sistema electoral que establece las reglas para la competencia, la representación electoral y,

por lo tanto, la estructura del sistema de partidos y el tipo de partidos permitido. Tanto los procesos electorales como el ámbito electoral pueden constituir puntos de acceso para que los MS influyan en las políticas públicas.

c.- Legislación e instituciones relacionadas con la vigilancia y control de protestas: La facultad que tiene el Estado de reprimir las acciones colectivas a través de la dación de leyes relativas al orden público, de acentuar la presencia de los órganos policiales en la solución de conflictos, otorgándoles mayores facultades para su intervención, o de crear nuevas instituciones (Favela: 2002,94).

Creemos necesario incluir, además, dos variables adicionales que nos ayudarán a comprender la acción del movimiento cocalero de Aguaytía:

a.- Intensificación de la erradicación en las zonas de cultivo de coca.

Es un instrumento de acción confrontacional que utiliza la Política Antidroga para provocar la reacción de los agricultores cocaleros. Es la principal acción que está supeditada al control impuesto por Estados Unidos, desde donde se supervisa el cumplimiento de las metas programadas y la consiguiente eficacia de la Política Antidroga.

b.- Incumplimiento de compromisos en las Mesas de Dialogo¹.

¹ Las Mesas de Diálogo son espacios de negociación de demandas entre los agricultores cocaleros y el Estado.

Tarrow también se ocupa de los cambios que experimentan los movimientos sociales, a los que denomina “ciclos de protesta”. Las fases de intensificación incluyen una rápida difusión de la acción colectiva, de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerada en las fases de confrontación, marcos nuevos o transformados para la acción colectiva, una combinación de participación organizada y no organizada, para finalizar con secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades (Tarrow:1997,264).

Lo interesante de la propuesta de Tarrow radica en los repertorios de las acciones colectivas que se desarrollan en las movilizaciones. Estos son considerados como un conjunto de medios que son aprendidos y ejecutados colectivamente. Tarrow plantea, para la realidad europea, la tipología de repertorios, viejos y nuevos. En el primer caso, los repertorios son locales, la acción es personalizada y directa contra el adversario; en el segundo caso, la forma de acción es más general e indirecta contra el adversario.

En su época, los movimientos sindicales y campesinos utilizaron los repertorios viejos: paros, marchas, mítines, asambleas, huelgas, plantones, saqueos, petitorios. En el capítulo VII, veremos cómo estas prácticas han sido re-significadas por los movimientos cocaleros en sus movilizaciones.

Tarrow, además, considera el marco de acción colectiva como elemento formador de la identidad del movimiento social, que hace posible su sostenimiento. El marco de acción está referido a los esquemas interpretativos que usan los individuos para dar cuenta de los hechos y acontecimientos que inspiran y legitiman las acciones colectivas. Los valores, las creencias y las normas que se manejan a nivel individual no constituyen el poder movilizador del marco de acción, sino lo que se teje a nivel colectivo: “sentimientos”, “entendimientos”, los saberes populares, las experiencias y los repertorios de la cultura política. Estas características van a ser descritas en el capítulo III, referido al desarrollo de acciones colectivas durante los gobiernos de turno.

1.1.2.- Las Políticas Públicas y la Política Antidroga.

La elaboración de las políticas públicas obedece a la visión que tienen los gobiernos sobre un problema particular que azota a la sociedad y vulnera el bienestar de los ciudadanos. Estas políticas deberían pasar por un proceso que va desde promoverlas y consultarlas hasta difundirlas (Lindblom: 1991, 56).

El elevado consumo de cocaína no fue un problema detectado por el Estado sino que se asumió como una preocupación internacional. La comunidad internacional, cuyo actor hegemónico es EE. UU., manifestó su preocupación por el abuso del consumo de drogas en este país,

considerándolo como una amenaza externa e incluso como un tema de seguridad nacional.

La concepción que maneja EE. UU. en su guerra contra las drogas consiste en combatir el origen del problema: la producción de hoja de coca, principal materia prima para la elaboración de cocaína. Se asume que la disminución de la oferta de cocaína, producida en el exterior, debe resultar en la reducción del abuso de drogas y del crimen organizado en EE. UU. (Youngers: 1989, 346). Entonces, los países productores de hoja de coca deberían adoptar políticas para reducir progresivamente la extensión de esos cultivos.

Esta posición se refleja en la opinión del procurador general del Estado de Florida ante el Comité del Congreso Norteamericano:

No creo que las formas tradicionales de acción policial sirvan para tratar con eficacia el problema...Hay tanta gente involucrada en el negocio que, a menos que coloquemos una línea de soldados hombro con hombro a lo largo de nuestras costas, los métodos policiales tradicionales no podrán contenerlo. Tenemos que ir a los países de origen para lograrlo. (Hamowy: 1991,166)

El Estado ha carecido de recursos para aplicar las diferentes políticas, por lo que ha necesitado el apoyo de la comunidad internacional para poder aplicar diferentes políticas públicas en la lucha contra las drogas. El caso de la Política Antidroga no ha sido la excepción. Estados Unidos financia la aplicación de las políticas públicas en la lucha contra las drogas.

Lógicamente, los fondos que llegan para aplicar las políticas vienen con una serie de condicionamientos. El estado asume una visión importada sobre el problema de la droga, que vulnera el derecho de los beneficiarios a participar de la aprobación de las políticas públicas.

Las políticas antidrogas registran dos momentos importantes en su historia. En un primer momento, estas políticas implicaban una mayor autonomía y protagonismo de los países productores de hoja de coca en combatir el ciclo de producción y comercialización de la cocaína. Las operaciones de erradicación e interdicción debían estar a cargo, principalmente, de las fuerzas policiales nacionales de cada país y el Estado asumía un rol protagónico en la aplicación de la política: control del comercio de sustancias a través del registro de los productores agrarios, monopolio de los cultivos a cargo de agencias estatales y las limitaciones impuestas a las actividades de exportación, asumiendo los países la responsabilidad de los resultados en cuanto a la disminución del cultivos de hoja de coca. Entonces, EE. UU. plantea la figura de la certificación, que consistía en la aprobación, por parte del gobierno norteamericano, del esfuerzo que ponían los países productores de coca en la guerra contra las drogas. Si los países productores no obtenían dicha certificación, EE. UU. retiraba su apoyo financiero a las políticas antidrogas en estos países y votaba en contra de cualquier préstamo o ayuda que éstos solicitaran a los organismos multilaterales (McClintock: 2005, 201).

En un segundo momento, EE. UU. implanta una visión más represiva y militarizada del tratamiento de la lucha contra las drogas, restándole más autonomía a los países productores de coca. Esta segunda etapa se caracteriza por la presencia de los ejércitos nacionales en el combate contra las drogas, pero también por la presencia más acentuada –incluso en bases militares- del ejército de los Estados Unidos para el adiestramiento a las fuerzas armadas nacionales, bajo la figura del “intercambio de experiencias”. Simultáneamente, se mantiene la “certificación” como mecanismo de presión para los países productores de hoja de coca.

La eficiencia de la política pública es medida en función a hectáreas erradicadas, laboratorios de procesamiento de cocaína destruidos y pistas de aterrizaje eliminadas. Sin tomar en cuenta el costo social que implica para el Estado ejecutar esta política.

Encontramos pues que la Política Pública de Lucha Contra las Drogas presenta las siguientes características:

a.- Es represiva.- Necesita de la participación de las fuerzas armadas en la aplicación de la política, sobre todo en la erradicación forzada de cultivos. Se caracteriza por la interdicción y la severidad de la legislación penal.

b.- Es condicionada.- El apoyo financiero, tanto para los Programas de Desarrollo Alternativo como para la erradicación, está supeditado a resultados: la reducción de cultivos de hoja de coca.

c.- No es autónoma.- La Política viene dictada desde los Estados Unidos, no hay un margen de maniobra autónoma por parte del Estado que lo faculte a modificarla.

d.- Es centralizada.- Ataca la parte más débil de la cadena de producción de droga: agricultores cocaleros, burriers, mochileros y comercializadores.

Las características de esta política crea las condiciones suficientes para la gestación de los conflictos sociales entre el Estado y los agricultores cocaleros. Tanto los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) como la erradicación, han sido mecanismos inviables que han provocado el accionar de los movimientos cocaleros. En el capítulo II desarrollaremos estos puntos en detalle.

1.2.- Metodología de la Investigación.

La zona de estudio se encuentra ubicada en la provincia del Padre Abad, en la región de Ucayali. Según la encuesta de DEVIDA-USAID del 2003, las principales zonas cocaleras tendrían como hectáreas cosechadas y agricultores involucrados:

Zona	N° agricultores	Has coca
Alto Huallaga	4 500	1 370
VRAE	4 096	2 667
Aguaytía	280	392

Fuente: DEVIDA-USAID:2003.

Estas cifras nos llaman la atención por tres razones que justifican, además, por qué elegimos la cuenca cocalera de Aguaytía. Primero, fue una zona que en el pasado contó con una presencia abundante de cultivos de hoja de coca, pero que en la actualidad no llega a las 400 has; segundo, este lugar ha tenido diversas intervenciones de desarrollo alternativo con distintos enfoques en las últimas décadas; y, tercero, hay una relativa debilidad del tejido social de las organizaciones sociales y productivas, así como del gobierno regional y local.

Nuestra investigación sobre los movimientos cocaleros es principalmente de carácter exploratorio y descriptivo, pues no existen investigaciones previas sobre este movimiento. Hemos utilizado tres técnicas cualitativas para el análisis: grupos focales, entrevistas semiestructuradas y observación participante.

La aplicación de los instrumentos se realizó en dos zonas específicas de Aguaytía: Shambillo y Huicoca. Estos dos casos han sido escogidos no sólo por los factores anteriormente mencionados, sino por el conocimiento que se tiene de estas dos comunidades, gracias a investigaciones anteriores. Se trata de zonas donde, según funcionarios del Estado, los Programas de Desarrollo Alternativo han tenido éxito y donde la mayoría de los pobladores pertenecen a la Asociación de Cocaleros.

1.2.1.- Grupos Focales.

Esta herramienta de análisis nos permitió recoger información sobre el proceso de intervención que han tenido los Programas de Desarrollo Alternativo en la zona y, a la vez, cotejar las diferentes apreciaciones que tienen los pobladores sobre los resultados de las movilizaciones realizadas.

Se realizaron dos grupos focales para el estudio: uno en Shambillo y el otro en Huicoca. El primer grupo focal, desarrollado en Shambillo, estuvo conformado por 8 agricultores cocaleros. Todos son migrantes y proceden principalmente de Huánuco, Tingo María y Puno. La mayoría no llega al nivel secundario. Sus edades fluctúan entre los 24 y 56 años y la cantidad de hectáreas que cada uno de ellos poseen fluctúan entre 4 y 20 Has. El segundo grupo focal realizado en Huicoca estuvo conformado por 4 agricultores cocaleros. La mayoría procede de Huánuco y Tingo María.

Su grado de instrucción no alcanza la primaria, sus edades fluctúan entre los 40 y 45 años y cada uno de ellos poseen entre 15 y 20 Has.

Para la selección de las personas que integraron los grupos focales se tomaron en cuenta variables como: nivel socioeconómico y educativo, género, valoraciones éticas sobre el cultivo de la coca y el narcotráfico. Los temas objeto de los grupos focales fueron La Política Antidroga y las estrategias que se utilizaban en las movilizaciones sociales.

1.2.2- Entrevistas.

Se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas. Los temas que se trataron fueron: percepción sobre la aplicación de la Política Antidroga, participación de los agricultores en la Asociación de Cocaleros y en las movilizaciones.

Se formaron tres grupos de entrevistados, compuestos por: autoridades locales, dirigentes de las asociaciones de productores de la zona y funcionarios del Estado.

La mayoría de los entrevistados son dirigentes o ex dirigentes relacionados con la Asociación de Cocaleros.

Factores como la desconfianza y el temor ocasionaron que muchas entrevistas no se llevaran a efecto o que se dejaran a medias. Tal actitud

es comprensible, pues se trata de una zona que sufrió la violencia política de los ochentas y, en los noventas, el Estado tildaba a sus pobladores de narcotraficantes o terroristas.

De ahí que optáramos por buscar fuentes indirectas (opiniones vertidas en los periódicos, documentos de instituciones estatales y privadas), a través de las cuales, también pudimos recoger la opinión de los funcionarios.

1.2.3.- Observación participante.

Este instrumento fue importante porque nos permitió recoger información directa de los espacios de deliberación que tienen los actores locales para la toma de decisiones. Participamos en asambleas, conversaciones dirigenciales formales e informales, reuniones con autoridades, etc.

1.2.4.- Instrumentos complementarios.

Utilizamos, como información secundaria, los diarios de circulación nacional y local, con la finalidad de reconstruir la historia de las intervenciones del Estado en la zona y de las acciones colectivas realizadas por los movimientos cocaleros.

Tuvimos la oportunidad de revisar el archivo del periódico “Ahora” de Pucallpa, del año 2000 al 2004, de donde recopilamos valiosa información

referida a las movilizaciones realizadas por los agricultores cocaleros, las entrevistas a sus dirigentes y a los funcionarios locales y nacionales, los comunicados de DEVIDA, del Ministerio del Interior y de organizaciones productivas de la zona. Asimismo, utilizamos el archivo de la hemeroteca de la Pontificia Universidad Católica para recopilar información del periódico “La República” del año 2004, así como también de la revista “Oiga”, del año 2000 al 2004, para recoger información sobre hechos políticos.

Asimismo, se nos permitió a través del asesor de la asociación de cocaleros, poseer el archivo correspondiente a los documentos sobre proyectos, solicitudes y memorandos de la asociación dirigidos a las diferentes instituciones gubernamentales. Estos documentos cubren el período 2000 – 2005. Estos materiales nos sirvieron para elaborar con mayor rigor la etapa de negociación que ha tenido el movimiento cocalero con el Estado.

Otras fuentes utilizadas en la presente investigación fueron: el archivo del primer presidente de la Asociación de Cocaleros de Aguaytía y el material audiovisual de los medios televisivos locales.

1.3.- Contexto local de la zona de estudio.

La Asociación de Productores Agropecuarios y Productores de Hoja de Coca se desarrolla principalmente en la provincia del Padre Abad, en el valle de Aguaytía, que se ubica en la cuenca del río Aguaytía en el departamento de Ucayali. La provincia del Padre Abad está conformada por 3 distritos (Padre Abad, Irazola y Curimana), 8 centros poblados, 189 localidades y caseríos dentro de los cuales se encuentran 7 comunidades nativas. La mayoría de los migrantes provienen de diversas regiones, pero principalmente de los departamentos de Huánuco, San Martín, Cerro de Pasco y Junín.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, se produce la primera ola migratoria por la fiebre del caucho y del petróleo. En 1940, se inicia la segunda ola migratoria, provocada por la construcción de la carretera Federico Basadre y, en 1960, se inicia la tercera ola migratoria, producto de la coca.

Los procesos migratorios hacia la provincia presentan un crecimiento acelerado desde los años setentas hasta los noventas. Se puede observar que, siendo la población de 8424 hab. en 1972, en 1981 pasa a ser de 10666 hab., llegando, en 1993, a triplicarse con relación a 1981 (Municipalidad Padre Abad: 2004a). Todo este patrón de crecimiento poblacional es análogo al de la ciudad de Pucallpa: en 1960, 26000 hab.;

en 1974, 50000 hab.; en 1981, 92000 hab.; en 1985, 106 000 hab. (INEI: 1986).

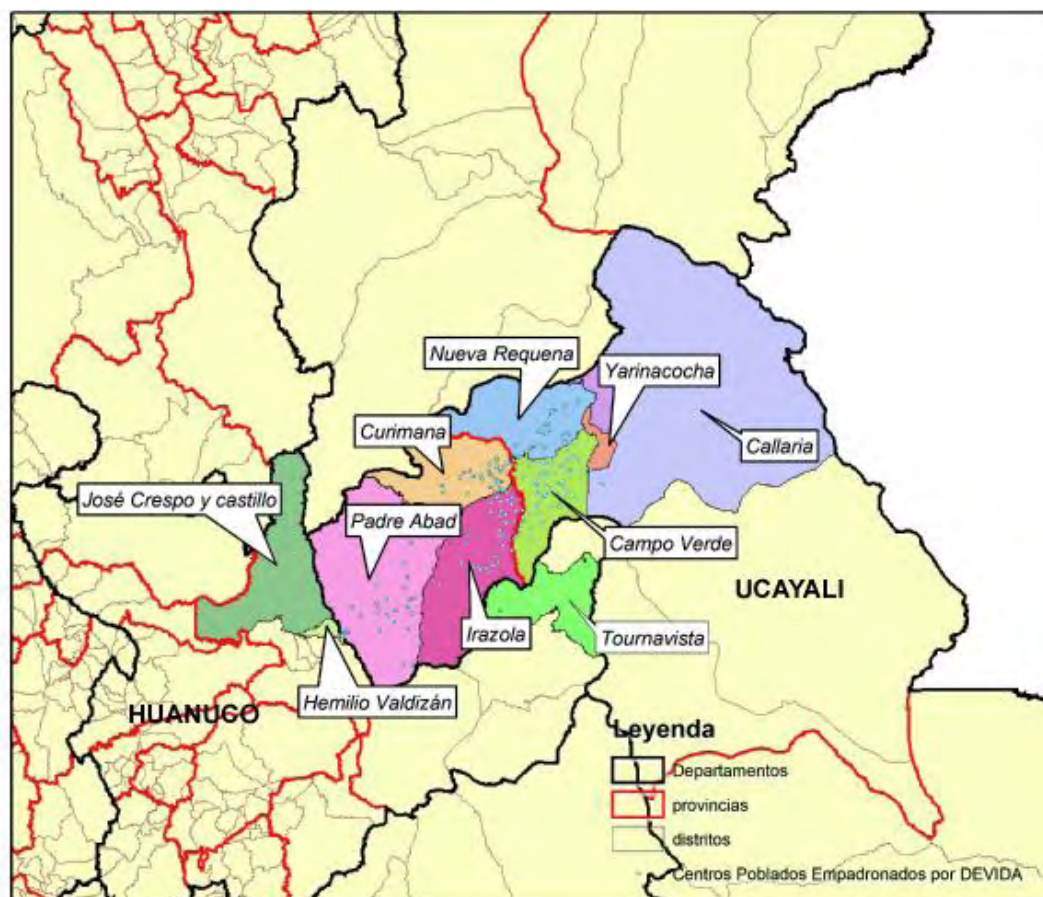
Simultáneamente, el aumento del cultivo de coca en la Selva es sintomático: en 1965, el cultivo de coca alcanza aproximadamente las 3 has., pasando a 10 has. en 1980 y a no menos de 195 mil has. en 1986.

El porcentaje de la población rural respecto a la urbana ha sido siempre mayor (1972:69%; 1981:73%; 1993:55%) por lo que la actividad predominante en la zona es la agricultura (de tipo extensiva).

La coca –al igual que otros cultivos como el plátano, el cacao, el té, el café y los cultivos anuales como la yuca, el maíz, el frijol, el arroz y otros– forma parte de la actividad productiva local.

En cuanto a los niveles de satisfacción de necesidades de vivienda, servicios sociales básicos, educación y salud, se encuentra que hay un contraste entre la capital de la provincia, Aguaytía, y los demás distritos y comunidades de la zona. De acuerdo con información actualizada a febrero del 2004 (Municipalidad de Padre Abad: 2004b), en la ciudad de Aguaytía, el 60.36% de las viviendas cuenta con conexión domiciliaria a la red de agua potable; 33.34% consume agua de pozo; 4.59%, agua de pileta pública y un 1.71%, agua del río. En cambio, en los distritos de San Alejandro o Curimana, el abastecimiento de agua se da de la siguiente manera: 42.1%, de río; 39.9%, de pozo; 3.6%, de puquial y 14.4%, de la

red pública. Este contraste se acentúa más en relación con las comunidades.



Centros Poblados Empadronados por DEVIDA dentro del Proyecto de Erradicación Voluntario en las Provincias Padre Abad y Coronel Portillo en el departamento de Ucayali, y, Leoncio Prado y Puerto Inca en el departamento de Huanuco

En 1990, la situación se tornó aún más crítica, no sólo por el déficit de servicios básicos sino también por el aumento de la superficie cultivada de coca, por lo que el Estado peruano, financiado por AID, interviene junto con Naciones Unidas.

A principios de los noventas, se empieza a desarrollar el proyecto de la palma aceitera, trabajando con los productores cocaleros que provenían de las zonas convulsionadas del Alto Huallaga (Tocache, Uchiza y Aucayacu). Durante la primera mitad de la década de los noventas, el Estado asignó recursos al desarrollo alternativo de la zona a través de INADE (Instituto Nacional de Desarrollo) y el PEAH (Proyecto Especial del Alto Huallaga) con financiamiento de los EE. UU. Durante la segunda mitad de los noventas, cobra notoriedad la presencia de la Cooperación Internacional y especialmente de EE. UU.²

Desde 1998, USAID financia proyectos con ejecutoras como WINROCK, CARE-CODESU y, recientemente, Chemonics. Este proceso de intervención se puede dividir en tres fases: en la primera fase (1998-2001), entró en la zona WINROCK, en asociación con operadoras locales y bajo la coordinación de CONTRADROGAS³ (la actual DEVIDA), máxima

² La participación de EE. UU. se hace más evidente en la lucha antidroga ya que comienzan a poner a ONGs norteamericanas como ejecutoras de los PDA.

³ Se crea CONTRADROGAS por la exigencia de EE. UU. que estaba solicitando que se establecería una institucionalidad política en la lucha contra las drogas. Por el D.S 158-90-PCM, ya se había creado la Autoridad Autónoma para el Desarrollo Alternativo (ADA), pero fue desactivada por presión de EE. UU. que exigía una intervención más militarizada.

instancia del Estado en políticas sobre drogas. Los resultados del trabajo del consorcio fueron duramente criticados por los agricultores cocaleros, quienes los calificaron como “creadores de más pobreza”.

Posteriormente, en la segunda etapa, llega CARE-CODESU que intentó continuar con algunos programas de la anterior ejecutora, pero tuvo que retirarse en el 2002, ante el rechazo de los agricultores cocaleros, quienes llegaron a incendiar el local de CARE-CODESU en la zona. En la última etapa, a mediados del 2002, entraría la operadora Chemonics que viene trabajando actualmente.

CAPITULO II

LA POLITICA PÚBLICA EN LA LUCHA ANTIDROGAS⁴: DESARROLLO ALTERNATIVO Y ERRADICACION.

2.1 La Lucha Antidrogas Durante el Siglo XX en el Perú.

La elaboración de las políticas antidrogas del siglo XX en el Perú, data del gobierno de Morales Bermúdez. Durante este régimen, se expiden las primeras disposiciones que norman el cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca, como la ley 22095 expedida en 1978, inspirada en la Convención Única de Estupefacientes de 1968. Este documento planteaba una serie de disposiciones para el control y comercialización de la hoja de coca que los países tenían que insertar en su legislación. Esta norma era de carácter militar y policial, y reprimía el cultivo de la hoja de coca por considerarlo un delito.

⁴ Esta se divide en tres acciones. Primero, en el campo de la interdicción a la oferta, el decomiso de la hoja de coca, pasta, base y clorhidrato de cocaína e insumos y equipo para su elaboración, así como el sometimiento a la justicia de los agentes que las producen y comercializan ilegalmente. Segundo, en el campo de la prevención de la oferta, la erradicación de cultivos ilícitos. Y, tercero, el desarrollo alternativo a su producción. Centramos el análisis en los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) y en los programas de erradicación, que son las áreas que más se han enfatizado en la Política Antidrogas.

Otras medidas de control que se establecen son:

- 1) La creación de una empresa privada-estatal, encargada de comercializar la hoja de coca. La empresa, ENACO, tendría como misión empadronar a todos los agricultores cocaleros, a nivel nacional.
- 2) Se establecía una serie de parámetros para controlar la venta de la hoja de coca, procesada en medicamentos, a cargo del Ministerio de Salud.
- 3) Los delitos por tráfico de drogas eran reprimidos con penas más severas.

En realidad, lo que tenemos, durante este período y, posteriormente, con los gobiernos de Belaunde Terry y Alan García, no es propiamente una Política de Lucha Contra las Drogas, sino que se trata sólo de una serie de acciones puntuales; por ejemplo, la creación del PEAH (Proyecto Especial del Alto Huallaga) –que tenía como finalidad impulsar propuestas alternativas al cultivo de la hoja de la coca mediante proyectos productivos y algunos de infraestructura– y del proyecto Especial CORAH (Proyecto Especial de Control y Reducción del cultivo de Coca en el Alto Huallaga), creado en 1982, con la finalidad de ejecutar y controlar las acciones de reducción del cultivo de la coca.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori⁵, se establece una diferencia sustancial con los anteriores gobiernos. Se implementa una perspectiva diferente a la visión del gobierno norteamericano sobre el problema de la coca, afirmando que se trataba de un problema de pobreza antes que delincencial. Los agricultores sólo eran individuos que cultivaban coca para sostener a sus familias, en tanto era la única alternativa rentable frente a otros cultivos, como el café, el cacao, el plátano, el algodón y otros. Esta posición lleva al gobierno de Fujimori a diseñar todo un programa que enfatizaba en la cuestión social, económica y ambiental del problema, aunque sin dejar de lado los programas de erradicación.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, la perspectiva sobre la coca sigue los mismos lineamientos trazados por el anterior gobierno. Para el periodo 2002–2004, se elabora la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas que se centra en cuatro ejes fundamentales:

- a) Programas de Prevención al Consumo de Drogas y Rehabilitación del Drogodependiente.
- b) Programas de Interdicción, Lavado de Dinero y Delitos Conexos.
- c) Programas de Desarrollo Alternativo y, cuidado del Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados.
- d) Programas de Erradicación.

⁵ Para mayor información ver “Plan Antidroga 1994-2000” MININTER, 1994.

De todos estos ejes, lo que nos interesa analizar está referido principalmente al Desarrollo Alternativo y a los Programas de Erradicación que son los pilares sobre los cuales descansa la efectividad de la estrategia.

2.2.- El Desarrollo Alternativo: una visión prometedora al problema de la hoja de coca.

El Desarrollo Alternativo ha sido definido como:

La gama de actividades enfocadas a la generación de ingresos legales para los productores con el fin de prevenir la expansión e inducir la eliminación de los cultivos ilícitos, bajo un marco de sostenibilidad ambiental y en un contexto dinámico capaz de absorber en el marco legal de la sociedad a la población afectada, identificada por cada uno de los países. (CICAD: 2004)

Esta visión va a encontrar una serie de dificultades para su aplicación. Primero, el gobierno estadounidense que presiona al gobierno de turno para disminuir la mayor cantidad de hectáreas de coca a toda costa, mientras que el Estado Peruano sólo se atiene a obedecer, sin plantear una propuesta propia que se adecue a su realidad, es decir, sin capacidad para ver el problema en toda su dimensión. Segundo, el desarrollo alternativo no es visto, por quienes lo financian, como uno de los ejes principales, que podría dar eficientes resultados para la reducción de cultivos de coca, por el contrario, lo consideran como un elemento marginal; por esta razón, los fondos que destina EE. UU. para este rubro son insignificantes. Tercero, las instituciones creadas para ejecutar y monitorear los Programas de Desarrollo Alternativo en el país, no ven al agricultor como un agente de desarrollo, sino más bien como un agente pasivo, es decir, sus conocimientos y experiencias no son tomados en cuenta a la hora de desarrollar los programas. Todo lo mencionado se va analizar con mayor profundidad en esta sección.

2.2.1.- Los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) en Aguaytía: Huipoca y Shambillo.

En los primeros años, los PDA son ejecutados por las propias instituciones públicas del Estado, sea creando proyectos, sea cediéndolos a instituciones estatales, como el PEAH, ejecutado por INADE y el Ministerio de Agricultura. Estas intervenciones estuvieron centradas en incentivar el cultivo de productos alternativos a la coca, así como en la ejecución de proyectos de infraestructura sin condicionamiento.

La ejecución de los PDA en Aguaytía se focaliza principalmente en el centro poblado de Huipoca y en la comunidad de Shambillo, perteneciente al centro poblado Boquerón. Las primeras intervenciones se realizaron en Huipoca y las últimas en Shambillo.

2.2.1.1.- Huipoca.⁶

La intervención del PEAH estuvo centralizada en la zona de San Martín y Huánuco, pero, posteriormente, se amplió hacia otras zonas como Aguaytía. Se ejecutaron proyectos productivos, principalmente de productos cítricos, con resultados insuficientes, tal como lo señalan los mismos agricultores: *“nos han apoyado en cítricos, me ha hecho sembrar*

⁶ Este centro poblado cuenta con 13 caseríos. Actualmente no está participando de los PDAP, por lo que forma parte de la Asociación de Cocaleros de Padre Abad-Aguaytía.

dentro de mi coca. Hoy en día es como un elefante blanco, no produce nada” (comunero de la comunidad de Río Blanco, GH1)

El MINAG ingresa a la zona a incentivar los proyectos de reforestación y de promoción de cultivos de arroz de agua y de yute. El primer proyecto ha tenido cierta eficiencia, porque lo realizado en aquellos años aún se mantiene en la actualidad; no obstante, los proyectos productivos no han corrido la misma suerte. Además de los magros resultados obtenidos, los agricultores quedaron endeudados sin saber que contraían esas deudas:

Te motivaron todo, pero cuando queríamos vender nos decía que no se había comprometido, tenía cara. Ellos dijeron que iba a ver una ganancia del 100% de los productos que nos daban, pero era una mentira. Ahora tengo una deuda del Ministerio de Agricultura. Ha venido plata para nosotros y nos han dejado. (Comunero de la comunidad de Río Blanco, GH1)

Durante la segunda mitad de los noventa, los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA) fueron desarrollados por diversas ONG, como Acción Agraria, CODESU y ADES, que fueron subcontratadas por Winrock International. Un representante de la ONG CODESU manifiesta lo siguiente:

El coordinador del Programa de Desarrollo Alternativo de la provincia de Padre Abad dice que cualquier persona o institución puede verificar los avances en cuanto a la sustitución del cultivo de hoja de coca por cultivos ilícitos como el camu camu, algodón, plátano, piña, palmito, cacao, cría de animales, menestras, que están generando bienestar económico a los agricultores. El objetivo es generar una cadena productiva que mantenga ocupado y alejado de cultivos ilícitos al agricultor. (P1)

Gráfico N° 1
Proyectos productivos del PDA en Aguaytía

Proyecto	Ejecutor	Área beneficiada	Participantes
Camu Camu	ADES	100 has.	70
Plátano	Winrock International	1949 has.	750
Palmito	CODESU	200 has.	100
Menestras	Acción Agraria	227 has.	211
Cacao	Winrock International	600 has.	250
Piña	ADES	44 has.	56
Capacitación Algodón	Acción Agraria	(*)	900
Sub total		2900 has.	2437

Fuente: (Boletín de Winrock International, 2001, 4).

Elaboración: Propia.

(*) No han proporcionado datos.

Estas ONG impulsaron proyectos productivos que fueron deficientes según las versiones de los agricultores, aunque el Estado manifiesta lo contrario:

Según documentos oficiales, se habría logrado formar 150 organizaciones productivas, asistencia técnica a más de 9000 productores, aumento del rendimiento en 300% en las diferentes líneas de producción y aumento de ingreso de los productores en un 330% (WI: 2001,10).

Veremos, en los siguientes párrafos, que estas aseveraciones contrastan radicalmente con la opinión de los agricultores. Consideremos, por ejemplo, el proyecto productivo del plátano FIA –impulsado por Winrock Internacional, a través de Acción Agraria– que promovía el cambio del típico plátano bellaco por ésta otra variedad de plátano.

Winrock International le encargó a la Fundación Hondureña Para la Investigación Agrícola (FHIA) la realización de un diagnóstico situacional en Aguaytía, respecto a los tipos de plátanos que se podrían cultivar en la zona y que, a su vez, fuesen resistentes a la plaga de Sigatoka Negra que, en esos tiempos, azotaba la zona. La Fundación recomendó que se trajera, desde Honduras, las especies FHIA-01, FHIA-18 (alternativa al plátano isla de Tingo María) y FHIA-21 (una alternativa para el inguiri y el bellaco).

La experiencia, que había sido exitosa en países centroamericanos, obtuvo resultados desastrosos en el Perú, debido a que no se tomaron en cuenta varios aspectos técnicos con respecto a su tratamiento, la falta de vías de comunicación fue un obstáculo para sacar los productos y la búsqueda de mercado resultó más complicada.

Pero antes que nada me han hecho botar mi bellaco para que me hagan sembrar el plátano FIA. Me decían este plátano que ustedes siembran no les vale nada yo les voy a traer un plátano de alta calidad que tenga mercado, ustedes van a tener buen ingreso. Van a comprar su cuatro por cuatro así como yo... Los plátanos FIA cuando estaban creciendo se doblaban ya no llegaban a producir algunos producían. Lo que he producido he llevado a Aguaytía (....) Cuando llegamos a entregar el producto nadie quería. Ni el chanco quería. (GH1)

No obstante, la posición adoptada por las autoridades responsables del resultado de estos proyectos, torna contradictoria la situación, como indica este comunicado de DEVIDA:

DEVIDA desmiente y rechaza las aseveraciones de aquellos que pretenden desvirtuar este 'proceso exitoso', así como el de desarrollo integral, que en forma conjunta, se vienen llevando adelante como una forma categórica de luchar contra la pobreza...reiteramos

nuestro apoyo a los agricultores mediante la ejecución de obra sociales que generan empleo, además de los beneficios del Programa de Desarrollo Alternativo. (C1)

Todos estos factores jugarían en contra de otros proyectos productivos que impulsaría CARE-CODESU. Con esta experiencia, esta zona cortó radicalmente cualquier vínculo con las instituciones estatales. Muchos agricultores se volvieron críticos acérrimos de los PDA y se plegaron a la Asociación de Cocaleros. Desde esos años, las instituciones estatales no ingresan a la zona.

2.2.1.2.- Shambillo.⁷

La intervención en esta zona estuvo a cargo de Chemonics, que ingresa con una nueva forma de trabajo, frente a los deficientes resultados de los anteriores proyectos. Se establece el Programa de Desarrollo Alternativo Participativo (PDAP), que plantea una intervención activa de los beneficiarios en la implementación de los PDA. Este programa consistía en proporcionar proyectos productivos y de infraestructura a cambio de la reducción gradual y concertada de hectáreas de coca.

⁷ Esta comunidad se ha plegado en la actualidad al PDAP.

Gráfico N° 2
Productos productivos de los PDAP en Aguaytía.

Proyecto	Área beneficiada (has.)	Participantes
Cacao	1600	1391 familias
Piña Cayena	51.5	116
Plátano	330	264
Maíz Amarillo	330	269
Palmito	150	106
Algodón	3500	1175

Fuente: Presentación del Informe de DEVIDA para la Sub Comisión de Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República: 2004,13.
 Elaboración: Propia.

Con las anteriores intervenciones, la participación de los agricultores cocaleros en los PDA era una decisión individual que no pasaba por la comunidad. La nueva estrategia de Chemonics consistía en involucrar a toda la comunidad en los PDAP, en virtud de lo cual, las comunidades que aceptaban el programa, firmaban los denominados Convenios Marco. Estos convenios establecían que los agricultores cocaleros decidían, en asamblea general, tanto los proyectos productivos como los de infraestructura; además, los agricultores se comprometían a erradicar su coca en forma gradual, a cambio, DEVIDA, se comprometía a pagar una cierta cantidad de dinero por hectárea erradicada.

Este giro en la estrategia de trabajo con los agricultores cocaleros implicó que uno de los funcionarios de alto rango del gobierno, asumiera una actitud crítica respecto al trabajo realizado. El ministro de agricultura Alvaro Quijandría manifestó:

Se reconoce que los programas de desarrollo alternativo no han tenido los resultados esperados, por lo que se cambiaría el enfoque de estos programas....Según explicó, los recursos que llegaban hasta los campesinos eran reducidos debido a la intermediación por parte de ONGs, pero indicó que esta situación también es corregible. (P2)

2.2.2.- Compromisos que incumplieron DEVIDA y CHEMONICS.

Una de las condiciones principales que exigió DEVIDA, para que los proyectos productivos, de infraestructura y de crianza de animales comiencen a desarrollarse, era que se erradicase toda la coca existente en la zona. Las comunidades trataron de transar esas condiciones planteando, como alternativa, que el proceso de erradicación sea gradual, que, conforme se implementaran los proyectos, se erradicaría la coca. DEVIDA no aceptó su propuesta, así que las comunidades no tuvieron otra opción que someterse a las condiciones que les eran impuestas.

Sin embargo, una vez producida la erradicación de su coca (lo cual se hizo en tan sólo tres meses), no había cuándo se inicien las obras o proyectos productivos, lo cual era explicable, toda vez que los objetivos de DEVIDA ya estaban cumplidos. En tal situación, las comunidades no encontraron la manera de ejercer presión para que DEVIDA cumpliera sus compromisos.

Los beneficiarios del Plan Piloto de Auto Erradicación, en la zona de Aguaytía, no han sido abandonados como parece ser la percepción en una parte de la opinión pública...La política es apoyar a las comunidades que tienen coca, no sólo en el corto plazo, sino trabajar con ellas en un marco de desarrollo lícito sostenible para los siguientes años, hasta asegurar su acceso y vinculación a los mercados lícitos. (C2)⁸

⁸ Comunicado de DEVIDA frente al sentir de los cocaleros.

Por las versiones de los agricultores, encontramos que fueron muchos los compromisos incumplidos por DEVIDA en todo el proceso de trabajo de los PDA. Supuestamente, los agricultores que se habían plegado a la “autoerradicación” voluntaria debían recibir un pago según la cantidad de hectáreas erradicadas; pero, luego, de modo abrupto, a los cocaleros sólo les iba a ser reconocido el jornal de trabajo, que era un pago insignificante comparado con lo que les había sido prometido inicialmente; a pesar de ello, los cocaleros aceptaron la “autoerradicación”, pero no se les pagó por su trabajo.

El proceso de autoerradicación se estaba realizando conjuntamente con las autoridades conforme al convenio; pero, en última instancia, esto no se cumplió. Algunos agricultores que se habían acogido a la autoerradicación, fueron objeto de la erradicación forzosa dirigida por CORAH⁹:

A pesar que había convenio con la comunidad, para el proyecto la mayor parte de la comunidad acepto voluntariamente. Sin embargo el CORAH vino, creo que ellos son contratados, ellos son abusivos mientras un sector de la comunidad un área están erradicando, por otro lado está aplicando en forma forzosa con su personal de CORAH. Ha incumplido con el convenio, fruto de esto es que hay muchos agricultores que se han quedado sin un centavo. (GC8)

En la parte de los proyectos productivos, se trabajó con los cultivos de cacao, plátano, piña y pijuayo para palmito. En cada uno de los casos, hubo una serie de problemas en la implementación de estos cultivos. Una

⁹ En el informe de 1989 del CORAH se planteaba que se habían erradicado 18,048.78 Has. Del 80% pertenecía a los agricultores no empadronados o campos abandonados; el otro 20% de los cultivos se encontraba registrados pero no cumplían los requisitos señalados por la ley. No especifican a qué se refieren con esto último

primera falencia es el escaso incentivo para cultivos diversificados; es decir, un campesino que participa en el proyecto del cacao no podía, a la vez, ser beneficiario de otro cultivo; además, la cobertura de estos proyectos no integraba a la mayoría de los “autoerradicados” y los que llegaron a beneficiarse no tenían el apoyo suficiente para mantener sus cultivos. Los agricultores sostienen que el apoyo brindado no fue lo que se les había prometido.

La misma situación se repitió en los proyectos de infraestructura. Los agricultores no escondían su descontento por el trabajo de CHEMONICS. Las obras han sido objetadas por la comunidad debido a las deficiencias encontradas en los trabajos; las carreteras y el local comunal son ejemplos de esta situación:

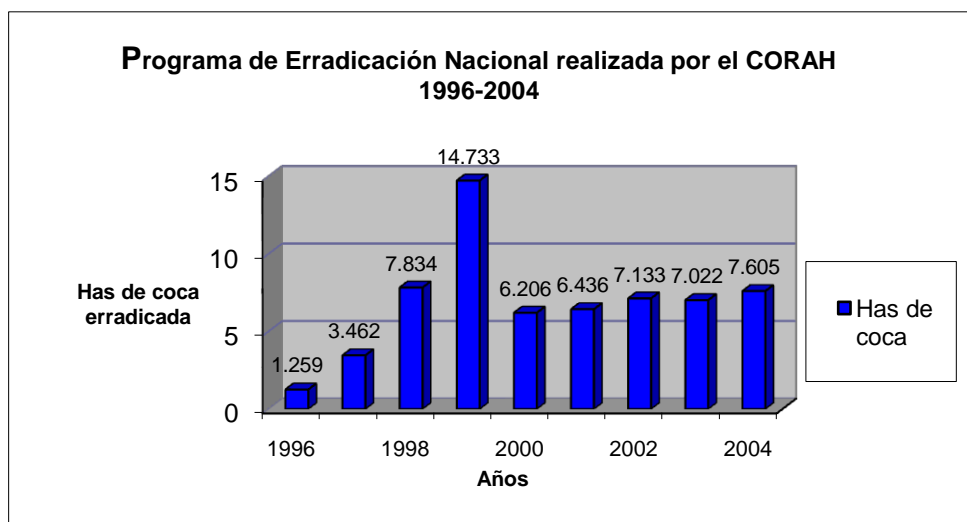
Ha hecho una carretera de Shambillo a Micaela Bastidas, entonces nosotros hemos presentado una observación en esa obra; en el estudio no está contemplado con una justificación nos decían. Esa obra necesita contornos, badenes, hacer cantarillas por los charcos de agua malogran la carretera. Por donde no ha hecho badenes el agua ya esta lavando. Se está invalidando esa obra, por eso no hace entrega de obras. No sólo en esta obra sino en diferentes obras. Se ha construido este local también no hace entrega de obra porque la comunidad ha hecho la observación. Por ejemplo, no ha puesto chapas, ha sobrado del presupuesto 21 mil soles. (GC5)

Los convenios firmados no establecen ningún cronograma de obras. Son convenios que han sido elaborados de acuerdo a los intereses de CHEMONICS y DEVIDA; por este motivo, los agricultores ven con desconfianza que las obras se concluyan y sólo esperan la buena voluntad de esas instituciones.

En el convenio se ha considerado que se haga un comedor popular para todo el valle de Chambillo, para la alimentación de los niños tampoco han hecho (...). Ahora con el puesto de salud parece que nunca lo van hacer porque simplemente a la comunidad nos han utilizado. Se ha hecho convenio de seis meses, pasado ese seis meses ya no valía, es un engaño para la comunidad. Yo tengo un convenio que ya caducó, del año pasado, y ahora me voy a reclamar y me dicen que ya se paso de fecha, no tiene validez. Eso es engaño. (GC6)

2.3.- La Erradicación: reducción de coca a costa de todo.

Gráfico N° 3



Fuente: Boletín del CORAH, Pura Selva, 2004, 32.
Elaboración: Propia.

El CORAH inicia sus trabajos de erradicación en 1983¹⁰ y suspende sus actividades en 1989, tras los atentados contra sus trabajadores; sin embargo, en 1996, se reanuda la labor de erradicación en todas las cuencas cocaleras.

¹⁰ El Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la coca en el Alto Huallaga (CORAH) fue creado por D.S. N° 043-82-AG en abril de 1982 con funciones de proyectar, ejecutar acciones de reducción del cultivo de coca. Depende administrativamente del Ministerio del Interior y recibe financiamiento de los EE. UU. a través de la Narcotics Affairs Section(NAS).

En 1999 se produce la mayor cantidad de coca erradicada en la historia: 14733.03 has. Posteriormente, la cantidad de coca erradicada disminuye. Los motivos podrían estar en la resistencia de las organizaciones cocaleras y la apuesta del Estado por buscar mecanismos complementarios como los Programas de Autoerradicación Voluntaria.

Ahora bien, la forma en la que interviene el CORAH, en las zonas cocaleras, se caracteriza por la utilización de la represión en la consecución de sus objetivos, una suerte de intervención militar-policial, como se refleja en la siguiente cita: “Para el desarrollo de los trabajos se cuenta con el apoyo de la PNP, DINOES, DIRAVPOL. La flota aérea está compuesta por UH-1H y el MI-17.” (CORAH: 2004, 27)

En 1999, los agricultores cocaleros de Aguaytía se organizan para hacer frente a la erradicación forzada que se produjo en los caseríos de Huipoca, principalmente. El temor de perder su coca es un elemento a tomar en cuenta, pero la forma como se producen las intervenciones, es también otro temor de los agricultores cocaleros.

En ese tiempo el trabajo era únicamente de correr en correr, de miedo en medio. Ahorita estamos conversando, comienza los “tokotop” (los helicópteros), uno tenía que estar ahí. Entramos a trabajar a las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, escuchábamos los helicópteros y teníamos que ir a correr a donde se sentaba, de ahí era una pelea con los “jala cocas”. Peleamos todo el día se iban a las 3 de la tarde, regresaban a sus chacras a las 5 de la tarde. Caserío por caserío teníamos que ir a defender, regresamos a las 7 de la tarde a descansar. Nos levantamos temprano aunque sea 2 horitas para trabajar, escuchábamos de nuevo nos íbamos de nuevo. Era un enfrentamiento atroz, balas, bombas lacrimógenas, con palos niños y mujeres a defender esas plantas. (E7)

CAPITULO III

LA ASOCIACIÓN COCALERA DE AGUAYTÍA

3.1.- Antecedentes de la Asociación de Cocaleros.

Las organizaciones que surgieron con anterioridad a la aparición de la organización de cocaleros, eran preferentemente de tipo sindical, que agrupaba a los trabajadores de las empresas petroleras de la zona. También existían organizaciones de carácter productivo, como la Liga Agraria de Aguaytía, la cual formaba parte de la Confederación Nacional Agraria del Perú. Una vez que las empresas explotadoras terminaron sus labores, muchos trabajadores que integraban los sindicatos se convirtieron en agricultores cocaleros.

La formación de la primera organización de cocaleros se divide en dos etapas: la primera, de 1964 a 1978, caracterizada por ser un período preliminar de experiencia de organización. Los agricultores de Padre Abad y otros agricultores de Monzón y Leoncio Prado fundaron el Comité de Productores de Tingo María. La formación de este comité fue producto de la reacción contra la delimitación de las zonas cocaleras, emprendida por el gobierno de entonces. La segunda etapa, de 1978-1986, está

referida a la existencia de una organización propia de la zona, con demandas propias. La causa principal de su formación fue la intención de participar en el empadronamiento que promovía ENACO.

Los primeros intentos de los agricultores cocaleros por organizarse se producen durante el primer gobierno de Belaunde Terry. En el año 1964, se trata de limitar la producción de coca mediante la promulgación del D.S 254, que delimitaba las zonas de producción cocalera a los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, La Libertad y San Martín, dejando, por consiguiente, en calidad de ilegales a las demás zonas. En respuesta a estas medidas, se forma la primera organización cocalera en la zona nororiental de la selva: el Comité de Productores de Coca de Tingo María. Este primer intento de organizarse fracasó debido a la muerte repentina de sus dirigentes en 1968.

En 1978, durante el gobierno de Morales Bermúdez, se expide el decreto ley 22095 o Ley de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas¹¹, con la cual se le declaraba la guerra al cultivo de coca en las zonas principales de Huánuco, San Martín y Ucayali. Por esos días, se crea el Comité Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y también la primera organización cocalera del Padre Abad: el Comité de Cocaleros del Padre Abad-Aguaytía.

¹¹ Fue parte de toda una estrategia regional para impulsar la lucha contra la droga. En Bolivia se expide el D.L 11245 de 20 de diciembre de 1973.

Este comité se formó en 1978 con la finalidad de participar en el empadronamiento que estaba elaborando ENACO para formalizar a los agricultores cocaleros¹². Esta organización funcionaba como interlocutor válido de los agricultores cocaleros, frente al Estado y a otras organizaciones (SUTEP, Frente de Defensa y PCP-SL). Su trabajo no sólo estaba referido a sus propios intereses, sino también a denunciar los actos de corrupción, abusos y atropellos de los institutos armados.

En aquellos tiempos la lucha era por la corrupción. Un policía quería venir a esta zona. En aquellos tiempos cuando llevábamos la coca a Tingo María, los policía, la PIP, el UMOPAR, abusaban de ellos, les quitaban su coca, incluso habían violaciones, robos. Nosotros denunciemos eso. (E11)

Este comité defendió a los cocaleros durante los operativos policiales Verde Mar I y Verde Mar II, desarrollados por la policía y el CORAH en los años de 1979 y 1982.

La Asociación operó de 1978 a 1986. El primer presidente de la organización fue el señor Alfonso Rodas, quien dirigió la organización de 1978 a 1984. Es el único dirigente en la historia del comité con experiencia en cargos públicos. En los setentas, fue secretario general del sindicato de trabajadores de una empresa petrolera de la zona. En esa época, ocupó el cargo de alcalde del distrito del Padre Abad. Asimismo, fue gobernador durante el gobierno de Velasco Alvarado y juez de paz durante el gobierno de Morales Bermúdez. En 1984, viaja a Lima para coordinar algunos asuntos con la central de ENACO y, a su regreso, se

¹² Este comité estuvo integrado aproximadamente por 36 agricultores cocaleros de la zona y sus extensiones de Has de coca oscilaban entre un cuarto de hectárea y una Hectárea y media. Su producción mínima y máxima que se entregaba estaba entre los 200 y 1,200 Kg de hoja de coca respectivamente.

entera que el CORAH había erradicado la coca en la zona utilizando el padrón de ENACO de los productores legales. Frente a este hecho, renuncia¹³, y el profesor Dario Macedo asume esta responsabilidad por encargo del director de ENACO de Tingo María, toma el cargo por 8 meses, luego de lo cual renuncia por motivos de trabajo. El sucesor de Macedo fue el vicepresidente, Carlos Ampudio, quien fue encarcelado por estar relacionado con el tráfico de droga¹⁴. La organización, a fines de los ochentas, ingresa a un período de crisis, debido a la falta de un cuerpo directivo que la sostuviera y, también, por el período de violencia política que se vivió en la zona. La situación empeoró en los años noventas, durante el régimen de Fujimori, quien aplicó una política económica agresiva que afectó al débil tejido social y utilizó mecanismos represivos a través del Servicio de Inteligencia Nacional para neutralizar a los liderazgos gremiales opositores al gobierno (Ballón: 2002), eliminando cualquier intento de movilización.

No había razón para que el control del cultivo de la coca no sea eficiente, ya que se podía monitorear, fácilmente, tanto el sembrío como la recolección de la coca, gracias a la cantidad reducida de socios; sin embargo, el nivel de corrupción de los institutos armados y la presencia de Sendero Luminoso, lo impidieron. Los agentes de la PIP (Policía de Investigaciones del Perú) y de UMOPAR (Unidad Móvil de Patrullaje

¹³ Lo que sucedió después fue que ENACO quedó desabastecida, por lo que tuvo que comprar coca a los ilegales.

¹⁴ Se mostró reacio a la entrevista. Comentó que el motivo de su encarcelamiento se debió a otros problemas que había tenido en Tingo María y que no tenían que ver nada con el narcotráfico.

Rural), destacados en la zona, fueron denunciados por vínculos con el narcotráfico. Sendero Luminoso no fue ajeno a esta situación, ya que prestó servicios de protección a los narcotraficantes, a cambio de dinero, para financiar la lucha armada.

3.2.- La Formación de la Asociación de Cocaleros de Aguaytía: la erradicación como factor desencadenante de su origen.

Los factores principales que explicarían la aparición de la Asociación de cocaleros de Aguaytía¹⁵ son: la política de erradicación -realizada por el CORAH- y los resultados de los Programas de Desarrollo Alternativo.

La coyuntura política intervino como un factor secundario en la aparición de la Asociación. Los cocaleros tuvieron la necesidad de organizarse en una institución que le diera legalidad a sus actos y les permitiera ser reconocidos por el Estado.

En los años de la aparición de la Asociación (1999-2000), se hizo evidente la crisis del Estado por los actos de corrupción y de violación de los derechos humanos que perpetró el régimen de Fujimori; además, se vivía un proceso de recesión de la economía, que había empezado cuatro años atrás con el estallido de diversas protestas sociales: la de los estudiantes universitarios en 1997, en contra de la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional; las protestas nacionales de 1998, a

¹⁵ La organización de cocaleros se forma entre 1999 y 2000. Las acciones colectivas de la Asociación como movimiento social se inicia a finales del 2000 como se hace referencia en el capítulo de las movilizaciones del 2000-2004.

raíz de la promulgación de la Ley de Interpretación Auténtica, la cual abría el camino a la postulación de Fujimori a las elecciones del 2000; las marchas de los sindicatos de construcción civil, por la falta de generación de empleo, en 1998; las paralizaciones en Iquitos, en contra de la firma del Tratado de Paz con el Ecuador; y, por supuesto, la marcha de los cuatro suyos, en el 2000.

El mensaje que utilizaron las ejecutoras para captar a los agricultores cocaleros fue la promesa de una “vida mejor”; no obstante, una vez desarrollados los proyectos, al no producirse los cambios prometidos, los agricultores lo percibieron como un engaño. La desconfianza se adueñó de ellos: no confiarían más en estas políticas impulsadas por el Estado.

La experiencia de los agricultores con estos proyectos creó un desencanto con respecto a los Programas de Desarrollo Alternativo como alternativa para pasar a una economía legal. Esta situación sería uno de los factores desencadenantes de la formación de la Asociación de cocaleros y, por lo tanto, del surgimiento de las acciones colectivas. No obstante, el principal factor que influyó en la decisión de los agricultores cocaleros de formar una Asociación, es la erradicación forzada.

En 1999 se intensifica la política de la erradicación y, a la par, hace su aparición la Asociación de Cocaleros. Los agricultores se organizan por la

presencia del CORAH más que por la situación de pobreza¹⁶. En términos del delegado de la Asociación:

Porque nosotros vemos una lucha justa en esto de los campesinos, entonces nosotros nos organizamos para defendernos nuestro producto (la coca), lo poquito que queda, y así sucesivamente, siquiera para mantener a los hijos en el colegio. No hay otro producto más que la coca, los productos alternativos no dan resultados. De esa manera, nosotros nos hemos formado ya una asociación. (E7)

Cuando se produce la erradicación forzada en la zona, la Asociación cobra protagonismo a través de diversas acciones colectivas que describiremos más adelante. Este es el primer hallazgo que encontramos: la relación de dependencia que existe entre el origen de la organización y los procesos de erradicación forzada. En esos años se produce la mayor erradicación en todos los tiempos (Ver grafico N° 3).

3.3.- La Estructura de la Asociación de Cocaleros: entre la verticalidad y la horizontalidad de las relaciones dirigencia-base.

La Asociación de Cocaleros del Valle de Aguaytía es conducida por una directiva central¹⁷, conformada por 50 sectores, presididos en cada zona por una junta directiva¹⁸ que representa a los diferentes agricultores. Esta estructura descentralizada responde a factores geográficos, por la dispersión de los socios que se ubican tanto en las zonas urbanas

¹⁶ A diferencia de los movimientos de organizaciones populares urbanas, como las juntas vecinales o los comedores populares, que se organizan para satisfacer sus necesidades básicas frente a la ineficiencia del Estado.

¹⁷ Está integrada por el presidente, el secretario de organización, el tesorero, el secretario de actas, además de los encargados de asuntos femeninos y juveniles.

¹⁸ Las directivas de cada sector están integradas por un delegado, que desempeña la función de presidente, un subdelegado, un tesorero, un secretario y un vocal.

(Aguaytía, San Alejandro y Curimana) como en las zonas rurales correspondientes a todas las comunidades de los distritos mencionados.

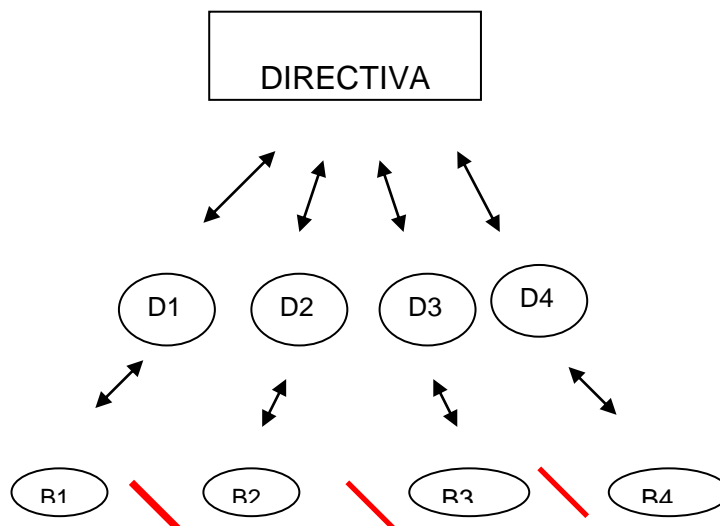
Esta estructura descentralizada es funcional tanto a las estrategias como a la supervivencia de la organización, porque mantiene viva la participación de las bases, sobre todo en las movilizaciones. En las diferentes acciones de protesta, es estratégico tomar la carretera Federico Basadre, desde la zona de Huipoca hasta San Alejandro, porque ocasiona el bloqueo de la ciudad de Pucallpa. La ubicación de las comunidades, alrededor de la carretera, facilita la labor y reduce los costos de estas medidas; sin embargo, esta dispersión, al mismo tiempo, le significa una debilidad al movimiento, ya que el alto costo, tanto para los agricultores como para la directiva, de compartir experiencias de organización, hace que la socialización de estas experiencias sea mínima.

Una forma de subsanar estas falencias es la realización de las llamadas “bajadas a base”, visitando cada comunidad con el fin de fortalecer la participación en las actividades de la organización en cada zona.

Esta estructura debería incentivar la competencia y el protagonismo entre los diferentes sectores en las movilizaciones y en los proyectos productivos, pero esto sólo se da en las labores en las que se designa a cada comunidad para tareas colectivas; por ejemplo, en la construcción del local participaron todas las comunidades, con aportes de materiales y

mano de obra. Lo ideal sería, más bien, generar, en cada sector descentralizado, la formación de líderes que alimenten a la organización.

Gráfico N° 4
Estructura funcional de la Asociación de Coccaleros de Aguaytía.



Elaboración: Propia.

En la estructura se observa que las D1, D2, D3, y D4 son las directivas que se han formado en cada sector o caserío, que son aproximadamente 50. El nivel de relación que se establece entre cada “D” y la junta directiva central es casi inexistente, pero hay un cierto nivel de articulación que se da a través del delegado, que es el vaso comunicante de la dirigencia central con la organización de cada sector.

Pese a que la estructura es descentralizada (pues encontramos autonomía en las decisiones de cada sector), existe, a la par, otra estructura vertical que la atraviesa, pues las decisiones se toman más arriba¹⁹, en las reuniones de la junta directiva central con los delegados.

¹⁹ A pesar de que estas decisiones son consultadas en las 70 comunidades, éstas tienen poca capacidad de crítica. No se ha registrado ningún caso en donde las propuestas de la directiva central hayan sido cuestionadas.

Esta estructura también tiene sus desventajas, pues no se observan –o se observan mínimamente– niveles de interacción entre las diferentes bases (B1, B2, B3, B4...) que permitan crear lazos comunitarios entre los integrantes.

Ahora bien, la dinámica de estas bases varía en función de la cantidad de coca que se encuentran en la zona. En el caserío de Boquerón, la comunidad de Shambo tiene 97 socios; en Huipoca, en Bajo San Pedro, 90 socios; en el Valle de Shambillo, en las comunidades de Selva Turística y Shambillo, sólo 7 socios.²⁰

Tener caseríos con cantidades desiguales de socios debería permitir la creación de alianzas entre los caseríos con más socios para poder conformar grupos plurales que hagan posible la competencia de propuestas; sin embargo, esto no se da, uno, porque la geografía no lo permite y, dos, porque la estructura misma no ayuda, toda vez que imposibilita formar grupos de presión que eviten la perpetuación de la dirigencia en el poder. Esto se observó en las elecciones del 2002, cuando se presentó una sola lista, integrada sólo por agricultores de la zona de Huipoca (Río Jordán, Cerro Colorado y Aguas Verdes), cuando debió haberse formado una lista plural, con miembros de diferentes zonas, que hiciera posible articular fuerzas para hacer frente a la dirigencia de la ciudad. La actual directiva es la que siempre ha dirigido la

²⁰ En estas zonas, la mayoría de los caseríos se han plegado a los Programas de Desarrollo Alternativo.

Asociación de Coccaleros del Valle de Aguaytía, desde sus inicios en el 2002.

Es mínima la presencia de liderazgos en las diferentes zonas de influencia coccalera. Los líderes son escasos y pasan desapercibidos: se trata de dirigentes dotados de ciertas cualidades de líder, pero que no se arriesgan a desarrollarlas por el temor de hacer frente a la dirigencia central.

3.4.- Las Asambleas: Espacios Simulados de Deliberación.

Las asambleas son los espacios públicos de deliberación de ideas y propuestas, donde la pluralidad de posiciones enriquece las prácticas democráticas en grupos y asociaciones de cualquier naturaleza.

Avritzer (2000) plantea que la deliberación pública constituye un proceso de cooperación entre los individuos que debe dar forma al ejercicio de la democracia y que la deliberación se conecta no sólo con el consenso, sino también con el disenso.

Las asambleas de la Asociación tratan de ser deliberativas, de debate, pero no están en las condiciones de serlo por falta de información, pues el conocimiento es acaparado por unos pocos: los dirigentes, el asesor y los periodistas, dejando de lado a la gran mayoría.

Los dirigentes, el asesor y los periodistas son los que crean las corrientes de opinión en las asambleas. Los dirigentes son los encargados de poner la agenda en debate. Los delegados asumen que las opiniones del asesor son sagradas, incluso la directiva las considera indiscutibles. Esta actitud, tal vez se deba a la muy respetable experiencia que ha tenido como funcionario en SINAMOS (Sistema de Apoyo a la Movilización Social), durante el gobierno de Velasco Alvarado, y de asesor en la CTAR (Consejo Transitorio de Administración Regional) de Ucayali, durante la gestión de Alberto Fujimori; su participación en los quehaceres de la organización es imprescindible, tanto en las mesas de diálogo como en la elaboración de propuestas de proyectos productivos.

No obstante, la presencia de los periodistas²¹ sirve como contrapeso a las propuestas de la dirigencia y del asesor. Esta “compatibilidad” de los periodistas con los cocaleros se produce no tanto por una convicción compartida en torno a la lucha por la hoja de coca, sino más bien por las denuncias, con relación a los programas de desarrollo alternativo, que recogen los periodistas. Además, la presencia de ellos, también es importante fuera de la Asociación, porque son los que se encargan, primero, de hacer frente a los medios que defienden la eficiencia de los Programas de Desarrollo Alternativo; segundo, de proporcionar información, valiosa por su escasez, sobre los temas de conflicto a la

²¹ Los periodistas en las asambleas cumplen el rol que deberían asumir los delegados. Por ejemplo en la asamblea del 21 de mayo el señor Alfredo Samora planteó que si la Asociación está solicitando un nuevo empadronamiento primero tenía que pedir que se eliminara la ley 22095 expedido en 1978, opinión que discrepaba con la del asesor.

opinión pública; y tercero, de difundir los diversos comunicados de la Asociación.

Los delegados, representantes de las bases, no están en condiciones de ser críticos o de hacer propuestas. Esto tiene que ver con el nivel de preparación y con el manejo de la información, que constituyen el monopolio de unos pocos. Entonces, aunque el acto deliberativo propiamente dicho nunca se produce, aun así se toman decisiones sobre:

- 1) La participación de la Asociación en los espacios de diálogo promovidos por las diferentes instituciones estatales.
- 2) Medidas respecto a la posible erradicación del CORAH en cualquiera de las zonas.
- 3) El trabajo en sus proyectos agropecuarios y la recaudación de fondos para ciertas actividades de la organización.

De manera que, los espacios de supuesta deliberación permiten legitimar los actos propios de la dirigencia. Esta misma lógica se reproduce en las asambleas de las bases, donde el nivel de deliberación es aún menor.

3.5.- La Participación en la Asociación.

El contexto en el cual se desenvuelve la Asociación, es una variable que debe tomarse en cuenta a la hora de analizar su participación en los diferentes ámbitos de la esfera pública. Para situar el contexto en el cual

se desenvuelve la participación de los agricultores cocaleros, ha sido necesario utilizar la tipología elaborada por Tanaka (2001, 24-30) sobre la participación en las políticas sociales.

Según la tesis que plantea este autor, los patrones de participación van a estar condicionados por el grado de complejidad de la población. Tanaka supone tres tipos ideales de sociedad, con contextos de baja, media y alta complejidad. Son relevantes para nuestra investigación, las características que tiene la participación en una sociedad de media complejidad, ubicada en el ámbito rural, pero articulada a centros urbanos y a mercados, lo cual le vale cierta heterogeneidad. Se trata de un contexto en el cual sus miembros han logrado el acceso a bienes públicos y la participación presenta una lógica individualista de búsqueda de bienes privados. En este caso, no encontramos una identidad comunitaria homogénea, sino más bien grupos con intereses diferenciados, muchas veces en conflicto abierto.

Las características de este tipo ideal reflejan, en parte, el contexto en el cual se desarrolla la Asociación de Cocaleros de Aguaytía. Todas las comunidades, a pesar de estar alejadas del centro urbano, tienen un nivel de relación con la ciudad, sea para comercializar sus productos o para proveerse de ellos. La pobreza se refleja tanto en la carencia de servicios básicos como en el bajo nivel de educación. La participación presenta una lógica individualista y la presencia de grupos de interés es notoria, pues

afrontar de forma individual el problema de la erradicación, tiene un costo mayor que afrontarlo colectivamente a través de una organización.

Nos preguntamos: ¿Qué pasaría si por disposición del gobierno se eliminara la erradicación forzada de las políticas de lucha contra el narcotráfico? O, en su defecto, ¿qué ocurriría si la organización no asegurara el impedimento de la erradicación? ¿Los agricultores cocaleros seguirían participando en la Asociación? Probablemente, sí. La erradicación es un factor decisivo que impulsa, provoca, e incentiva la participación, pero ésta no se agota en aquella, pues los cocaleros encuentran otros beneficios al formar parte de los proyectos ganaderos y forestales que maneja la Asociación de Cocaleros²²

Quizás, el segundo factor a tomar en cuenta como motor de la participación, después de la erradicación, es la venta de la hoja de coca, a través de la organización, a ENACO (Empresa Nacional de la Coca). La Asociación se encarga de acopiar la hoja de coca para ENACO, que será llevada a Tingo María para su comercialización. Pero, al parecer, más importante que la venta de la coca es obtener el recibo de venta que otorga ENACO. Es de suponer que una parte de la coca de los asociados no se esté vendiendo a ENACO, que se esté destinando a otros mercados como el narcotráfico, por lo que el recibo es importante para justificar o “legalizar” la posesión de una cantidad de hoja de coca. Por

²² Están trabajando un proyecto ganadero en convenio con el Gobierno Regional y un proyecto forestal con Naciones Unidas. En ambos proyectos, las instituciones se encargan de suministrar los implementos necesarios para su ejecución; y los agricultores participan con mano de obra calificada.

esta razón, cuando se produce la erradicación compulsiva, los agricultores aumentan su entrega de coca a ENACO a través de la Asociación.

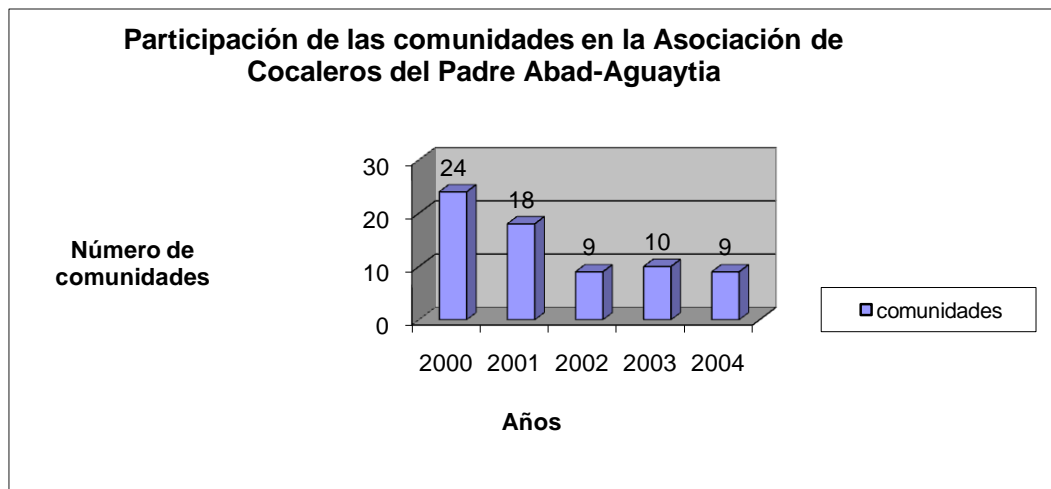
Yo lo que me refería al decir que algunos entregan por cumplir es que, en sí, hablando en serio, hay algunos que tienen regular, es decir 30 a 40 arrobas. Ellos como mayormente venden a otros (...) traen solamente como pueden, como ya tienen un sencillo que recibieron, lo que es una arroba traen (...). Hay algunos que dicen que importa que pase por segunda, pero que me den mi guía porque con la guía de ENACO se defienden ellos, es lo que garantiza la coca. (E4)

Esta situación se crea debido a la incapacidad de la Asociación para controlar a sus socios y a su desinterés con respecto al destino que tendrá el resto de la coca cultivada que no pasa por la Asociación.

A pesar de todo, si medimos la participación, a partir de indicadores como cantidad de coca entregada, aportación, asistencia a faenas comunales y a las reuniones, observamos que el nivel de participación en la Asociación es parcial. Casi un 50% no asiste a las reuniones, la mayoría no está al día en sus aportaciones y es mínima la asistencia a las faenas, de modo semejante a lo que sucede en las demás organizaciones de la zona. Sin embargo, los agricultores cumplen fielmente con entregar su coca a la Asociación, única instancia autorizada para comercializar con ENACO.

3.5.1.- Evolución de la Participación de las Comunidades en la Asociación.

Gráfico N°5



Fuente: Libro de actas de la Asociación de Cocaleros del Padre Abad – Aguaytía.
Elaboración: Propia.

La Asociación se inicia con 24 comunidades en la que la mayoría había sufrido la erradicación compulsiva. Durante el período 2000-2001, se produce un incremento masivo de comunidades que se integran a la Asociación. Esto se debería principalmente a la intensificación de la política de erradicación forzada, por esos años. A partir del 2002, las comunidades se adhieren a la Asociación por el temor a la erradicación y por el desencanto de los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA).

Formar parte de la Asociación de Cocaleros funciona como una especie de “seguro”, en caso de que la comunidad sea erradicada, pues si esto llegase a suceder, la Asociación tiene el deber de brindar a sus miembros el apoyo necesario, que se traduce en la entrega temporal de terrenos en otras comunidades socias para cultivar sus productos, entre ellos, por supuesto, la coca.

CAPITULO IV

PARTICIPACION Y CICLO DE PROTESTA DEL MOVIMIENTO COCALERO DE AGUAYTÍA

4.1.- La Participación en la Acción Colectiva.

La acción colectiva se caracteriza por ser desafiante, por crear incertidumbre y por generar solidaridad entre los activistas. En este sentido, se va creando una cierta identidad, con base en la interacción conflictiva con el Estado. Esto explicaría, en parte, por qué la gente participa más en las acciones colectivas. Es el marco de acción que le otorga significado a las condiciones en las que se encuentran los actores. Se crea, entonces, una interpretación colectiva de los hechos, como la erradicación forzada, por ejemplo, que se entiende como un acto que vulnera el derecho a proveerse de los recursos necesarios para vivir; los cocaleros perciben como un acto injusto que el Estado quiera quitarles la fuente de sus ingresos, sienten que no tienen las mismas oportunidades que otros ciudadanos para generar sus propios ingresos.

Como se verá, el movimiento considera como un éxito la suspensión temporal de la erradicación, pero sus demandas no se agotan en este

punto. Su capacidad de agencia se expresa en su seguridad con respecto a la eficacia de las movilizaciones.

Hasta el momento el gobierno central no está tomando con responsabilidad y eso puede ir antagonizando cuando hay una movilización a nivel nacional, cualquier cosa puede suceder. Estamos viendo que el pueblo indignado cuando se levanta no va ser difícil sacar a un presidente o aun ministro. (E3)

Ante un Estado que no les provee las condiciones necesarias para vivir y que reprime ferozmente sus movilizaciones, los agricultores sienten que, otra vez, la cuerda se rompe por el lado más débil, porque ese control y esa represión deberían dirigirse más bien hacia quienes comercializan la coca como droga. Los agricultores cocaleros sienten que no son culpables de lo que hagan los narcotraficantes con la hoja de coca.

En este tipo de espacio de participación podremos encontrar una gama de formas de acción colectiva. Tarrow (1994, 180) plantea tres tipos de acción. La primera, la violenta: ataques a personas o propiedades, choques -con otros descontentos o con la policía- y vandalismo. La segunda, la convencional: huelgas, marchas, mítines públicos, asambleas, peticiones, audiencias y acciones legales; y, la tercera, la disruptiva: bloqueos, ocupaciones y acciones directas.

En la acción colectiva de los movimientos cocaleros, estos tipos de acción se combinan. La acción se inicia, usualmente, con una huelga o marcha, pero se puede obviar este paso y comenzar más bien con bloqueos de carreteras, produciéndose, eventualmente, actos violentos; finalmente, la acción colectiva concluye, por lo general, en negociación y compromiso.

La dinámica de las movilizaciones, del 2001 al 2004, ha tenido estas características. La presencia y la intensidad de los actos dependen del nivel de organización y control de la acción, del análisis de costos que realicen los dirigentes de la acción y también de los objetivos de la acción, pero, principalmente, del nivel de atención que le presten a las demandas tanto el gobierno como la opinión pública.

La violencia genera límites para la acción colectiva, puesto que reduce la capacidad de incertidumbre del movimiento social. Los dirigentes cocaleros tratan en lo posible de que sus acciones sean pacíficas, pero la masa cocalera sobrepasa, en muchos casos, el mando de los dirigentes; esto se debe, principalmente, a que en un contexto de movilización la influencia de los dirigentes sobre las decisiones colectivas pierde eficacia²³.

Esta situación ocasiona que muchos actos pacíficos se transformen en violentos, como el asalto al local del consorcio CARE-CODESU en el 2002, por lo cual dirigentes y socios se ganaron una denuncia penal ante la fiscalía.

Usualmente, el tipo de acción colectiva que está presente en sus movilizaciones es la disruptiva, caracterizada, en este caso, principalmente, por el bloqueo de carreteras, que es la acción que más

²³ Esta aseveración se sostiene en la siguiente información brindada por un entrevistado: "... en una huelga todos dicen: *aquí no hay dirigentes*... Si alguien quiere decir algo tiene que ser debatido en la masa... (E4)

conocen y que, podríamos decir, se ha institucionalizado en el movimiento. Este tipo de participación es el que genera mayor costo para los agricultores, sin embargo, es uno de los espacios de mayor participación.

Cuando se convoca a una movilización, los dirigentes y los agricultores hacen un análisis de costos y beneficios; pero, a pesar del costo elevado, la consideran como una acción efectiva.

El costo de esta acción, en términos de apoyo a las demandas, es alto para los demás actores: la población urbana y las organizaciones productivas; más todavía cuando la medida se prolonga por mucho tiempo.

En la última movilización en la zona conversaron con los dirigentes, les dijeron que tenían cargamento de plátano que tenían que llevar a Lima, ellos los dejaron pasar, pero estando en Tingo María no pasaron, incluso el camión fue apedreado por los cocaleros. El dirigente de Aguaytía manifestaba que él le podía dar permiso en esta zona, pero en Tingo María no tenía mando, eran otros dirigentes. (E10)

Igualmente, los objetivos inmediatos de la movilización se ven perjudicados, en cuanto se haga presente la represión del Estado, en cuyo caso, es muy probable que la acción se convierta en violenta, lo cual termina deslegitimando las demandas de los cocaleros ante la opinión pública.

Estas acciones²⁴, muchas veces, convocan a otros sectores: socios que no participan en las asambleas (agricultores que no creen en las asambleas, sino en acciones concretas), simpatizantes y cocaleros ilegales. Los actores al interior del Estado: alcaldes y congresistas, simpatizan con estas medidas, por el rédito político que significa su participación. En muchos casos, los agricultores cocaleros, buscan la presencia de este tipo de actores para darle legitimidad a sus acciones. Es claro el juego de intereses que aquí moviliza la acción colectiva.

Por que cuando hay una huelga, legitiman su lucha, ellos siempre están pensando que los van acusar de terroristas, de narcotraficantes, y ellos para que no ocurra eso, se protegen a través de las municipalidades, siempre vas a ver tú en las huelgas de cocaleros, o hay un alcalde o un congresista que los está apoyando, porque si no hay esa legitimidad, no irían a la huelga, siempre tiene que haber alguien que esté dentro del Estado, para poder irse a la huelga, si no, no lo hacen, entre ambos se aprovechan mutuamente. (E6)

4.2.- Ciclos de Protesta del Movimiento Cocalero de Aguaytía.

De las cinco movilizaciones que se dieron durante el período 2000-2004, encontramos que la más intensa de todas fue la última: la marcha hacia Lima. Con las cuatro anteriores movilizaciones, el movimiento cocalero había acumulado experiencia y recursos²⁵, alcanzando su pico más alto de poder de acción colectiva. Esta intensificación de la movilización no significa necesariamente una mayor presencia de violencia, sino la

²⁴ El intento del Estado de responder a este tipo de acciones primero mediante la represión y después mediante la criminalización de las protestas sociales muestra una visión equivocada de la resolución de los conflictos sociales.

²⁵ En las movilizaciones anteriores, no se percibió una ampliación de la acción colectiva a otros sectores y mucho menos se experimentaron formas diversas de acción colectiva ya conocidas: marchas en la ciudad, piquetes que recorren las carreteras con arengas, obstrucción de carreteras, toma de locales y enfrentamiento con la policía.

creación o recreación de nuevas formas de acción colectiva, que dependerán del aprendizaje colectivo acumulado en la interacción con el Estado.

La marcha hacia Lima fue una reproducción de sus marchas en sus ciudades de origen. Esta acción, nueva en su experiencia de enfrentamiento con el gobierno, les abre posibilidades de aliarse con otros sectores: los comerciantes del Mercado de Santa Anita y diferentes organizaciones sociales²⁶. Fue una nueva forma de acción que sobrepasó el ámbito local, e incluso el regional, y que demostró, tanto a los limeños como a los propios agricultores cocaleros, la capacidad de movilización y de desafío al Estado. La marcha hacia Lima implicó la participación indirecta de diferentes sectores, entre los cuales se contaban los agricultores “erradicados”, e incluso los ex cocaleros, quienes, mediante su empresa COCEPU, manifestaron su apoyo a los manifestantes.

En el ciclo de protesta, hay siempre, un efecto de acumulación, que contribuye a su creciente intensificación, pero también hay un efecto contrario de desgaste, que contribuye a debilitar la protesta, en la medida en que reconoce sus resultados limitados (Sánchez: 2003).

En las cuatro movilizaciones anteriores a la marcha hacia Lima, los resultados en cuanto a satisfacción de demandas fueron limitados, de lo cual podría inferirse que el movimiento llegó debilitado a este acto. Sin

²⁶ El grupo de reservistas liderado por Antauro Humala, quiso plegarse al movimiento a su llegada a Lima. Pero la dirigencia decidió prescindir de su apoyo porque lo consideraban un grupo que enarbolaba la violencia.

embargo, los resultados, no sólo son medidos por los cocaleros en función a la satisfacción de todas sus demandas, sino también a los resultados concretos e inmediatos que se consiguen con la simple movilización de los cocaleros, por ejemplo, la suspensión momentánea de la erradicación forzada. Esto tiene una valoración trascendental en la percepción de los cocaleros respecto a la efectividad de las movilizaciones. Un hecho que se observa es la existencia de un resultado constante producto de las movilizaciones: la paralización de la erradicación.

La protesta puede surgir a partir de una demanda específica, pero fácilmente puede incorporar otras, incluso involucrando a otros sectores. Cuando se exige al gobierno más hospitales, universidades y crédito para los agricultores, las demandas no sólo se amplían sino que terminan incluyendo a los demás ciudadanos. Si las demandas son satisfechas, como sucedió con las primeras, el movimiento cocalero gana adeptos y, sobre todo, legitimidad en sus acciones. Asimismo, la legitimidad de la Asociación de Cocaleros del Padre Abad de Aguaytía ante la población, se fundamenta en la capacidad de presión que le reconocen a la organización en la solución de problemas de la provincia.

Entre los pobladores de la ciudad y las organizaciones productivas, incluso entre los partidos políticos que operan en la zona, las demandas de los cocaleros tienen legitimidad; no obstante, discrepan en cuanto a los medios que utilizan para hacer sentir sus demandas. Esto tiene que

ver con las acciones que realizan en las paralizaciones, es decir, la toma de carreteras, las huelgas en la ciudad, donde se producen actos de violencia, como el amedrentamiento a los pobladores que no acatan las paralizaciones.

El declive o desmovilización del movimiento cocalero podría estar a la vuelta de la esquina, si consideramos, por un lado, que los agricultores cocaleros miden los resultados de las movilizaciones en función de la suspensión de la erradicación y, por otro lado, que tal logro no se produjo luego de la marcha hacia Lima. La utilización máxima de recursos, durante la marcha, significó un alto costo para los cocaleros, que afectará, sin duda, la participación en las siguientes movilizaciones.

Paradójicamente, aunque se produce la intensificación de las acciones de protesta con la marcha hacia Lima, ésta significa, a su vez, el inicio del declive del movimiento cocalero a nivel nacional, pese a que se diga que esta marcha sirvió como un acto sensibilizador hacia la población limeña con respecto a la realidad que se vive en el campo.

Este ciclo de protesta es producto de la interacción entre los actores: los movimientos sociales, las autoridades y los miembros del sistema político. Por ello, pasaremos a describir cómo se han dado esos procesos de interacción, sean de confrontación o de cooperación. Tal ejercicio nos permitirá el análisis del impacto de las acciones colectivas en la Política Antidroga.

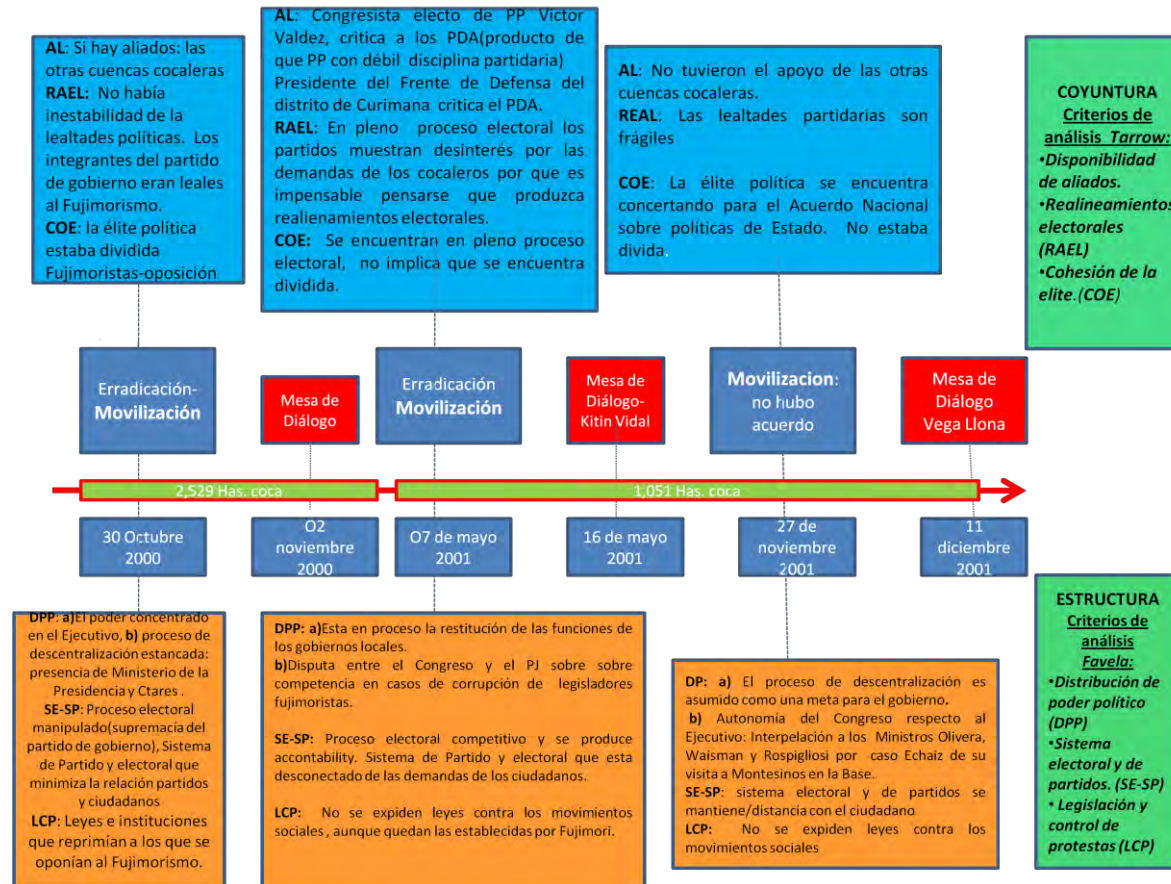
4.3- Las Movilizaciones Cocaleras: 2000-2004.

En esta sección, vamos a demostrar la hipótesis central del trabajo: que las acciones de los movimientos cocaleros tienen una mínima incidencia en la elaboración de las políticas antidrogas en la zona de Aguaytía. Paralelamente, analizaremos, a través de las variables propuestas por Tarrow y Favela, los factores coyunturales y estructurales que condicionan la acción colectiva del movimiento cocalero de Aguaytía, sin dejar de lado la descripción de la dinámica de relación que se establece entre el Estado y el movimiento social.

Para analizar las principales movilizaciones, ha sido necesario agruparlas en dos etapas: la primera, el período de transición política (2000-2001) que abarca los gobiernos de Fujimori y Paniagua; la segunda, el gobierno de Toledo (2001-2004).

Cuadro N°6

Trayectoria del movimiento cocalero de Aguaytía durante los gobiernos de Fujimori y Paniagua: 2000-2001.



Para el período 2000-2001, hemos elaborado una línea del tiempo con la finalidad de ubicar los hechos principales que acaecieron durante el accionar del movimiento cocalero de Aguaytía.

Tanto la erradicación como las Mesas de Diálogo son variables que tienen mucha influencia en el desenvolvimiento del movimiento cocalero. La presencia constante de la erradicación en este período, como reactivador de las acciones del movimiento, se convierte en la variable más fuerte para entender la dinámica del movimiento cocalero. Durante este período se produce la mayor cantidad de hoja de coca erradicada en la historia de Aguaytía que equivale 1,478 has. A la vez, se produce una mayor adhesión de comunidades a la propuesta de reacción del movimiento hacia el Estado. Las otras variables propuestas por Tarrow: disponibilidad de aliados, realineamientos electorales y la cohesión de la élite, influyen, pero en menor medida; aunque, durante el Fujimorismo, la variable “cohesión de la élite” tuvo cierta influencia en el accionar del movimiento.

Las variables “distribución del poder político”, “sistema electoral y de partidos” y “legislación y control de protestas” son ineficientes para entender la dinámica del movimiento.

4.3.1.- La Trayectoria del Movimiento Cocalero de Aguaytía Durante el Gobierno de Fujimori.

Como se mencionó en el capítulo I, Favela plantea una serie de elementos políticos estructurales que funcionarían como estructuras de oportunidades, las cuales facilitan o condicionan la acción colectiva de los movimientos sociales, sobre todo en regímenes autoritarios.

Analicemos, para el caso del movimiento cocalero, si estos elementos políticos condicionan y mantienen la acción de los cocaleros en este período.

Se sabe que la distribución del poder durante el gobierno de Fujimori fue casi inexistente: era en el Ejecutivo donde se concentraba el poder y no existían contrapesos institucionales, el poder Legislativo estaba capturado por la mayoría del partido de gobierno y el Poder Judicial se encontraba manejado por operadores políticos digitados por Fujimori. En resumen, se había montado todo un engranaje institucional para que todos los poderes estén a merced del gobierno.

Los gobiernos subnacionales -regionales y locales- no tenían presencia como instancias de gobiernos autónomos. El ministerio de la presidencia acaparaba todo el presupuesto para las obras sociales, lo cual dejaba sin piso a los gobiernos subnacionales.

Los mecanismos de democracia directa que se abrieron, funcionaron, en la práctica, como una maquinaria clientelar. Los ciudadanos no tenían espacios legítimos y autónomos para influenciar en las decisiones de las políticas. La concentración del poder no favorecía la aparición de la acción colectiva. En todos los niveles del Estado, la participación de los ciudadanos fue limitada. Dado que la corrupción campeaba en las diferentes instituciones gubernamentales, resultaba contraproducente permitir la participación o abrir las instituciones al ciudadano para que éste ejerciera un control vertical.

Una variable a tomar en cuenta es la efectividad del proceso electoral, como principal procedimiento de selección de gobernantes, es decir, el punto en el cual los funcionarios públicos son sometidos al escrutinio de los votantes. La otra es el grado de competitividad en el sistema de partidos, entendido como número de partidos contendientes, comportamiento electoral y legislativo. Estas variables determinan si el ámbito electoral y el sistema de partidos son puntos de acceso para los movimientos sociales en el proceso de toma de decisiones y de influencia en la formulación de políticas públicas (Favela: 2000).

Si analizamos los procesos electorales durante el gobierno de Fujimori, como la elección del CCD en 1992, el referéndum constitucional en 1993 y las elecciones en 1995 y 2000, es evidente la supremacía del candidato gobernante, que no dudó en utilizar la maquinaria estatal para perpetuarse en el poder, por lo cual, inferimos que en estos procesos

electorales hubo una desigual competencia; además, estos procesos electorales estuvieron cubiertos por el manto de la duda y la sospecha, dadas las enormes facilidades que tenía el régimen para manipular los resultados.

Un proceso electoral es una forma de evaluar a los gobernantes y de influenciar indirectamente en los procesos políticos, pero aquellos que se llevaron a efecto durante el régimen de Fujimori fueron bastante limitados en este aspecto, pues no sirvieron como espacios para evaluar el desempeño de los funcionarios del gobierno²⁷.

En todos estos procesos eleccionarios se percibe una crisis aguda en el sistema de partidos. Crece la presencia de movimientos independientes, sustentados en liderazgos personalizados; además, los partidos que tenemos están desprestigiados o en vías de consolidarse, todo lo cual vuelve muy frágil al sistema. Con este tipo de actores, es imposible pensar que las demandas de los movimientos sociales puedan llegar al sistema político.

²⁷ Los resultados del referéndum de aprobación de la Constitución de 1993 pueden leerse como un cierto rechazo hacia la forma de cómo Fujimori estaba llevando el país, pues el “SI” no ganó abruptamente, en cambio, el “NO” ganó en más del 50% de los departamentos del país.

Tanaka habla del colapso del sistema de partidos para referirse a esta crisis, la cual se debería al agotamiento de la manera de hacer política hasta ese momento (Tanaka: 2005,21). Otros autores sostienen que la incapacidad de superar la situación de crisis económica y violencia política (Cotler: 1994, 166) produjo una combinación de elementos institucionales: fuerte presidencialismo con un parlamento ineficaz, leyes electorales benevolentes que permiten la proliferación de candidaturas y partidos, así como la doble postulación a la Presidencia y al Parlamento; en suma, un sistema electoral incoherente. Además, los partidos no se preocuparon por establecer términos de competencia razonables (Tuesta: 1995, 128-129).

Todos estos factores provocaron que los partidos políticos dejaran de ser los interlocutores válidos de las demandas ciudadanas, produciéndose una aguda crisis de representación y de legitimidad en los actores políticos.

Pero, si el sistema de partidos políticos está influenciado por el sistema electoral, es necesario destacar cómo fue afectada la representación por los cambios que se hicieron en este último.

Con la constitución de 1993, se revisaron varias normas electorales, como la creación de un parlamento unicameral, el cual se eligió bajo la llamada circunscripción plurinominal con distrito electoral único. Con este dispositivo, se redujo el número de parlamentarios de 240 a 120 con lo

que se incrementó la relación electores – parlamentarios, socavando la capacidad de representación del sistema (Tuesta: 1999, 30) y permitiendo que ingresaran muchas agrupaciones pequeñas. La atomización resultante, generaría una fragmentación en el sistema de partidos, que redundaría, en la práctica, en una mayor dificultad para llegar a consensos. Además, el distrito electoral único, calificado como centralista, no permitió el control de los electores del desempeño de los representantes.

El manejo económico del gobierno es otra variable que no ha sido tomada en cuenta por Tarrow ni por Favela, pero que es importante porque, a pesar de la cierta estabilidad macroeconómica que se registra, el sistema económico no está produciendo los efectos esperados. El modelo ha generado crecimiento, pero ha creado poco empleo y ha incrementado las distancias sociales. La apuesta por la inversión extranjera llevó a privilegiar sectores como el primario exportador (mina, pesca) y de servicios modernos (telecomunicaciones) que generan poco empleo. (Francke: 1999, 42). Si bien ciertos indicadores relacionados a las necesidades básicas han mejorado, el ingreso de la población no ha corrido la misma suerte. La reducción de la pobreza en estos años no es significativa.

Favela sostiene que una de las características de los gobiernos autoritarios es la represión o la dación de leyes que reprimen la acción colectiva. Durante el gobierno de Fujimori se dieron una serie de normas

legales para combatir el terrorismo. Estos instrumentos fueron utilizados no sólo para enfrentar a los grupos alzados, sino también para neutralizar a todo aquel que se opusiera al régimen fujimorista. Tal es el caso del decreto Ley N° 25475, Ley Antiterrorista, en cuyo marco, cualquier ciudadano se volvía pasible de ser acusado de terrorista y, de hecho, fue utilizada para amedrentar a los opositores, encarcelarlos e incluso asesinarlos, como ocurrió con muchos periodistas y dirigentes, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Bajo la excusa de combatir al terrorismo, se atemorizaba a los dirigentes de las diferentes organizaciones. Las investigaciones sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales quedaban en nada. Tal es el caso del líder de los cocaleros Walter Toca, quien murió en circunstancias aún no esclarecidas. El 16 de agosto de 1991, en Uchiza, Fujimori hizo referencia a Toca, diciendo: “no me olvidaré de él y he dado las instrucciones claras para que se haga justicia”. Esta justicia nunca llegó. (Oiga: 1992,15).

Al contrastar las variables propuestas por Favela, encontramos que, el *establishment* y el aparato institucional fujimoristas, paralizaron los intentos de acción colectiva del movimiento cocalero de Aguaytía; sin embargo, cuando Fujimori cae, los movimientos sociales, en general, comienzan a emerger. Los actos de corrupción de los funcionarios²⁸, la

²⁸ El hecho que precipitó la caída de Fujimori fue la propalación del video Kouri-Montesinos, con lo cual se desencadenó la crisis total del fujimorismo.

precariedad del Estado de Derecho y la violación de los Derechos Humanos, durante la gestión del presidente Fujimori, provocó la protesta de los diferentes sectores sociales.

Las paralizaciones del movimiento cocalero de Aguaytía se inician con el paro del 30 de octubre del 2000, que se realiza a nivel de todas cuencas cocaleras del Perú. Analicemos el contexto en el cual se desarrolla esta primera acción colectiva.

Tarrow hace referencia a la disponibilidad de aliados poderosos que apoyen a los movimientos sociales. Siendo su primera acción colectiva, el movimiento cocalero no cuenta con aliados en las instancias del sistema político ni en la sociedad civil. La opinión pública descalifica a los militantes del movimiento cocalero, lanzándoles epítetos como “narcotraficantes” y “narcoterroristas”; por lo tanto, aliarse a los cocaleros resulta contraproducente para los intereses de congresistas y personalidades de la sociedad civil. No obstante, algunos actores políticos se arriesgan a apoyar a los cocaleros, lógicamente, con el interés de captar votos, toda vez que los agricultores cocaleros son considerados como un “bolsón de electores”.

Teóricamente, los realineamientos electorales pueden constituir un incentivo para las movilizaciones; sin embargo, los procesos electorales se vuelven poco atractivos para los grupos sociales no representados, cuando están manejados o manipulados, debido a lo cual no hay espacio

para la acción colectiva en esta coyuntura política y la influencia que puedan tener los movimientos sociales es mínima.

Por último, Tarrow sostiene que, cuando la élite política está sólidamente unida, los movimientos sociales enfrentan una posición cerrada a sus demandas. La cohesión de la élite política sería un factor que influiría en el desenvolvimiento de los movimientos sociales.

La élite política se encontraba dividida en tiempos de Fujimori: por un lado, teníamos a los partidos de gobierno defendiendo al sistema; por otro lado, la oposición (con sus propias divisiones internas) pugnaba, en el Congreso -presidido por la bancada oficialista-, por lograr que una nueva correlación de fuerzas tomara a su cargo la mesa directiva y, por este medio, vacar al presidente.

Entonces, la acción colectiva del movimiento cocalero de Aguaytía se inicia teniendo como telón de fondo a una élite política confrontada y polarizada.

Creemos que los factores mencionados, tanto estructurales como coyunturales, son suficientes para entender la aparición y el mantenimiento de la acción colectiva del movimiento cocalero de Aguaytía. En particular, son importantes las variables propuestas por Favela. El poder centralizado, los procesos electorales poco atractivos para los ciudadanos, la represión y control de protesta por parte del

Estado, fueron factores que influenciaron negativamente la acción colectiva. La cohesión de la élite y los realineamientos electorales sólo la favorecieron en parte; mientras que, la variable “disponibilidad de aliados”, es muy débil para explicar la acción colectiva en este período.

La dinámica del movimiento se entiende complementando los factores internos con los externos. La presencia de la Política Antidroga, específicamente a través la de la erradicación forzada, causa la organización de la población y las acciones colectivas en defensa de sus recursos. El gobierno maneja la visión de EE. UU., según la cual, hay que imponer la ley a la fuerza, en tanto que la actividad que realizan los cocaleros es ilegal. La represión a través de la erradicación no hace más que crear las condiciones para que los agricultores se organicen y hagan frente al Estado. Es un instrumento que tiene un enorme protagonismo dentro de la Política Antidroga, para lo cual se invierte la mayor cantidad de fondos que recibe el Perú por parte de EE. UU.

Los resultados de la Política Antidroga se miden, principalmente, en función a hectáreas de coca erradicada. Es la variable preponderante que explica el accionar de los movimientos cocaleros en este período.

Ambas partes tienen posiciones contradictorias sobre el cultivo de la hoja de coca: para el Estado, el cultivo de la hoja de coca es ilegal, pero no lo es para los agricultores cocaleros; no obstante, coinciden en condenar su uso para la elaboración de droga.

A nivel interno, la organización tenía una serie de deficiencias organizativas: carecían de personería jurídica, por lo que sus acciones eran consideradas ilegales. Se organizaban y realizaban acciones colectivas a pesar de tener recursos escasos y desconocer el resultado de las mismas.

Los dirigentes que asumieron la representatividad de la organización no habían sido elegidos democráticamente por las bases, sino por los delegados, lo cual implicaba una débil representación y una frágil legitimidad. Tampoco tenían experiencia política al frente de este tipo de acciones (marchas, paralizaciones o enfrentamientos con el CORAH); además, no mantenían una relación fluida con actores externos a la organización, por lo que su capital social era mínimo. Lo único que podría garantizar el éxito de sus acciones era que éstas se realizaran a nivel nacional con las demás cuencas cocaleras del Perú.

La paralización del 30 de octubre se produce, principalmente, por la erradicación indiscriminada que estaba realizando el CORAH, no sólo en Aguaytía, sino en otras zonas cocaleras. Sus demandas centrales eran:

- 1) Suspender la erradicación de la hoja de coca.
- 2) Realizar un estudio socioeconómico de la zona.
- 3) Estudio de suelos.
- 4) Apoyo del Estado para el desarrollo alternativo.
- 5) Integrar a los agricultores al directorio de ENACO.

- 6) Reempadronamiento.
- 7) Mejoramiento de los precios para los productos tradicionales.
- 8) Instalación de centros de acopio.

En cuanto a las demandas coyunturales, relacionadas con la crisis política, los cocaleros exigían que se desconozca el compromiso asumido por Fujimori con EE. UU., respecto a la meta de erradicar por lo menos 15000 de las 38700 hectáreas de coca existentes y, además, exigían que se destituya al jefe de Antidrogas, en tanto había sido nombrado por Fujimori.

Las primeras conversaciones se trabaron por la exigencia de los agricultores de suspender definitivamente la erradicación forzada, pero, posteriormente, se firmó el acta en la cual se acordaba suspender temporalmente la erradicación y la suspensión de la paralización:

- 1.- Suspender el paro regional indefinido que vienen realizando los agricultores del Alto Huallaga, Valle del Monzón y Padre Abad, y constituir una Mesa de Diálogo Permanente con representantes de los agricultores, autoridades locales y del gobierno.
- 2.- Suspender temporalmente las acciones de erradicación de cultivos de hoja de coca que viene realizando el CORAH en estas zonas cocaleras y continuar la misma previa coordinación con los representantes de los agricultores cocaleros. (D1)

A pesar de la crisis, se llegó a diversos acuerdos, como la formación de las Comisiones de Erradicación, Comercialización y Desarrollo Alternativo, integradas por los diferentes actores sociales involucrados: las organizaciones cocaleras, municipios e instituciones estatales

(CONTRADROGAS, ENACO, Ministerio de Agricultura). De este modo, se logra paralizar momentáneamente la erradicación forzada²⁹ y la movilización, mientras que las otras demandas estaban lejos de solucionarse. Este es uno de los acuerdos tomados en la Comisión de Erradicación:

La comisión de Erradicación está de acuerdo en que se debe emprender el proceso de reducción gradual en forma concertada con los agricultores (...) El proceso de erradicación se reiniciara después de 21 días...fecha que se está acordando para que las organizaciones de productores realicen el empadronamiento general provisional. (D2)

Estos acuerdos son, una vez más, incumplidos por el Estado. Pareciera que la consigna entre los funcionarios de rango medio es que los agricultores cesen, de inmediato y a toda costa, sus medidas de lucha, confiados en que los ministros desconocerán los acuerdos. Por ejemplo, el empadronamiento es una demanda vetada por el gobierno³⁰, sin embargo, los funcionarios de rango medio asumen este compromiso, aún sabiendo que no se va cumplir en el futuro.

Nils Ericson Correa, presidente de ENACO planteó la conveniencia de estudiar las posibilidades económicas y financieras para comercializar en el exterior productos de desarrollo alternativo y registrar como patrimonio de la nación a la hoja de coca como cultivo milenario del Perú que puede ser industrializado legalmente. (P3)

²⁹ Hugo Cabieses manifiesta en pleno proceso de negociación lo siguiente, "Hasta ayer (un día antes de la formación de las Comisiones) hubo erradicación y esa acción es producto de las presiones de la embajada norteamericana, a través de la sección de Asuntos de Narcóticos, al gobierno democrático del Perú". En: La República.17 de diciembre del 2000.

³⁰ Se aduce que ya se cuenta con el padrón de 1978 y que actualizar este padrón implicaría reconocer a nuevos agricultores y, por lo tanto, legalizar nuevos cultivos de coca.

La naturaleza de estas afirmaciones, nos hace pensar que este funcionario está declarando para la tribuna, porque, obviamente, esta propuesta será desechada por el gobierno. La Política Antidroga considera a la hoja de coca como un problema, de modo tal que industrializarla implicaría legalizarla, con lo cual se estaría incentivando su cultivo.

El nivel de influencia de esta primera movilización es débil, en tanto no nos permite visualizar, de forma contundente, cuáles son los espacios en los cuales el Estado va a ceder frente al movimiento cocalero. Posteriormente a esta primera acción de los cocaleros, se suceden, por lo menos, cinco paralizaciones más, que originaron situaciones de tensión con el gobierno.

4.3.2.- Trayectoria del Movimiento Cocalero de Aguaytía durante el Gobierno de Paniagua.

4.3.2.1.- La Movilización Cocalera del 7 de mayo del 2001.

Una vez caído el gobierno de Fujimori, el Congreso nombra a Valentín Paniagua como presidente transitorio. Es un período en el cual el gobierno goza de un reconocimiento internacional y nacional por el manejo técnico y político de la crisis; de ahí que, el contexto en el cual se desarrolla este paro cocalero, está signado por una cierta tranquilidad política y económica.

Como producto del paro del 30 de octubre, se formó una Mesa de Diálogo entre los agricultores cocaleros y el gobierno, en la cual se acordó la formación de comisiones de diálogo, pero estas comisiones no cumplían con los acuerdos; inclusive, jamás se formó la Comisión de Comercialización. Esto refleja que el interés del gobierno por formar estas comisiones no era otro que el de apagar la movilización en el momento, sin mayores intenciones de solucionar los problemas de fondo.

En febrero de ese año, se lleva a efecto la erradicación forzada en las zonas de Alto Huallaga, Aguaytía, Valle del Monzón y Apurímac. Esta situación se produce, incomprensiblemente, en pleno proceso de diálogo.

El jefe de CONTRADROGAS Ucayali, Falla Figueroa, manifestó que era un error lo que había sucedido, ya que no se podían erradicar las zonas donde se estaban implementando los Programas de Desarrollo Alternativo.

Ha habido casos aislados de erradicación en zonas en donde se estaba ejecutando los Programas de Desarrollo Alternativo, en donde parece que hubo descoordinación...Preciso que han visto que, en zonas en donde se han realizado Proyectos de Desarrollo Alternativo y, en que hubieron acciones de erradicación, deterioraron el trabajo de Contradrogas, debido a que los trabajos de erradicación son de tipo operativo militar y causan impacto social y económico. (P4)

Entonces, por un lado, las instituciones del Estado tratan de entablar el diálogo con los cocaleros, mientras que, por otro lado, todo ese trabajo es saboteado por las acciones del CORAH, que depende del Ministerio del Interior. Lo que le importa a esta institución es erradicar los cultivos a como dé lugar, ya sea en zonas no liberadas o, incluso, en zonas donde

el Estado esta incentivando a los agricultores a través de los Programas de Desarrollo Alternativo, lo cual perjudica el trabajo de otras instituciones que apuestan por el “desarrollo con diálogo”.

El 4 de mayo, el CORAH lleva a cabo la erradicación forzada en las zonas de Curimana, San Alejandro y Padre Abad, provocando la reacción de todos los agricultores cocaleros del valle de Aguaytía, quienes convocan a una huelga para el 7 de mayo. Esta medida sólo se realiza en la cuenca cocalera de Padre Abad-Aguaytía.

El repertorio que utiliza el movimiento cocalero no dista de los utilizados por los sindicatos o gremios en épocas anteriores. El “obstaculizar las vías” es una medida que no tiene mucho costo individual y colectivo; no obstante, cuando interviene la policía y la violencia se hace presente, el costo se eleva:

La huelga indefinida que desde el lunes sostienen los agricultores de la cuenca del Aguaytía, fue radicalizada con la formación de piquetes que recorren la carretera Federico Basadre desde el kilómetro 200 de esa vía hasta la localidad de Alexander Von Humboldt, en el kilómetro 86, tramo en el que casi no han colocado obstáculos, pero ellos mismos se encargan de impedir la circulación de vehículos. (H1)

Tomar la “vía Basadre” se vuelve costumbre, en tanto representa un repertorio conocido y aprendido por los cocaleros. Es una importante vía que une a la ciudad de Pucallpa con la Costa y la Sierra. Bloquear esta carretera significa, de hecho, que Pucallpa quedará desabastecida, de ahí el carácter estratégico de esta medida.

Los precios de las verduras y productos de pan llevar regionales, que provienen de la carretera, se incrementaron notablemente en los principales mercados de Pucallpa, tras ingresar al quinto día del bloqueo de la carretera Federico Basadre. (H2)

Cada una de las catorce cuencas existentes tiene autonomía en cuanto a las medidas que toman frente a la erradicación forzada.

Todavía funcionaba, en ese tiempo, la CONAPA (Coordinadora Nacional de Producto Agropecuarios), que agrupaba a los agricultores de las diferentes cuencas, pero su peso, como organización integradora y representativa de todas las cuencas cocaleras, era débil, incluso ya estaba en franco proceso de desaparición; como reflejo de esta situación, Aguaytía no recibía ningún apoyo de las demás cuencas cocaleras.

Además de este aliado que no está dentro del sistema –pero que ayuda a que la represión no se centralice en una zona, sino se diversifique en las diferentes cuencas cocaleras–, también vamos a encontrar aliados dentro del sistema, pero que son islas y no necesariamente se sienten identificados con las demandas de los cocaleros, sino que, más bien, utilizan estos eventos como tribunas o para llamar la atención de los medios.

El Congresista electo, Víctor Valdez, del Partido Perú Posible, envía una carta al Presidente Paniagua, en donde expresa que lo único que pretenden los agricultores de esa provincia es la justicia, respeto a sus sembríos y el derecho de alimentar a sus familias. Este paro indefinido solo puede ser levantado cuando se efectivice el programa de cultivo

alternativo... nuestros agricultores se han cansado de promesas. (C3)

Los frentes regionales, provinciales y distritales, en la mayoría de los casos, se identifican con las demandas de los movimientos sociales, pues, sus demandas, benefician a la población en general.

La presidenta del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Curimaná, Rebeca Tuesta expresó que los agricultores y cocaleros de la provincia del Padre Abad...vienen exigiendo al gobierno la propuesta de sustituir las plantaciones de coca con cultivos que tengan un real mercado de consumo con precios dignos y seguridad. (P5)

Los gobiernos regionales y locales también son aliados, aunque, normalmente, se muestran imparciales ante estas medidas; sin embargo, en el fondo, simpatizan con los reclamos de los cocaleros, porque sus demandas incluyen obras para la comunidad.

Pese a que esta acción colectiva se realiza antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2001, no se percibe que los partidos políticos tengan interés en las demandas de este sector de la población que se encuentra en movilización. En este período electoral, es impensable que se produzcan realineamientos electorales, es decir, que producto de las demandas de los cocaleros se produzca una disputa entre los partidos, o dentro de los mismos, por captar los votos de los cocaleros.

En los programas de gobierno de los partidos políticos, no se encuentra referencia alguna sobre el tema de la hoja de coca o cómo enfrentar al narcotráfico; por el contrario, encontramos a los partidos haciendo una

serie de ofertas electorales demagógicas. La creación de empleo y el aumento de sueldo -a maestros, policías y trabajadores de salud- son la “piedra de toque” de, al menos, tres candidatos (Caretas: 2001a, 19).

Tarrow sostiene que, cuando la élite se encuentra dividida, se abren espacios para la acción colectiva, pero, en pleno proceso electoral del 2001, no se percibe ninguna situación que nos ayude a dilucidar si la élite política se encontraba unida o confrontada, más allá de las acusaciones y ataques entre los candidatos que son el pan de cada día de toda elección, por ejemplo, el caso de paternidad del candidato Toledo que fue utilizado permanente por sus contendores (Caretas: 2001b, 12).

En cuanto a la distribución del poder, se percibe cierta independencia de poderes, entre el Legislativo y el Ejecutivo, aunque todavía quedan remanentes de corrupción y manipulación política de la mafia en el Poder Judicial, el cual se encontraba en reestructuración. Muchos jueces dejarían sus cargos por haberse vendido al Fujimorismo y otros serían repuestos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El proceso de descentralización, como forma de desconcentrar el poder central, todavía es débil. Se da inicio a un franco proceso de desmontar lo que Fujimori había construido, a través de las CTAR, con el Ministerio de la Presidencia. Se perciben ciertas iniciativas, como las disposiciones relacionadas a darles mayor competencia a los gobiernos locales, con respecto a las funciones de COFOPRI, o la dación de la Ley del Canon, la

cual reconocía los ingresos que tenían que percibir los gobiernos regionales y locales, tanto por los fondos y rentas del Estado como por los ingresos de la explotación de los recursos naturales.

Las elecciones, según Favela, sirven para aprobar o desaprobar el desempeño de los funcionarios de turno. Durante las elecciones generales de la primera vuelta del 2001, en la provincia del Padre Abad, la Alianza Electoral “Solución Popular”, que representaba al Fujimorismo, apenas obtuvo el 0.6% de los votos emitidos. Este resultado es contundente, así como a nivel nacional, el rechazo a las diferentes políticas de Estado en esta zona y, en general, a la manera en la cual el gobierno de Fujimori manejó el país.

El sistema electoral de las elecciones del 2001 es el mismo que se utilizó para las elecciones de 1993 y de 2000. No hubo cambio de reglas, de modo que se mantuvo la estructura del sistema de partidos y el tipo de partidos permitido.

Respecto a la dación de leyes o de acciones para controlar las movilizaciones, no se visibilizan las acciones del Ejecutivo para endurecer los mecanismos que sancionen las protestas sociales.

Las variables propuestas por Tarrow son débiles para entender la dinámica del movimiento cocalero de Aguaytía durante este período. Los aliados con los que cuenta el movimiento son actores locales, cuya

influencia es débil. La presencia de otros movimientos sociales relacionados con la coca, diversifican la represión del Estado hacia el movimiento, pero no funcionan como aliados con capacidad de influenciar en la acción colectiva.

En este período de elecciones, no encontramos que haya inestabilidad electoral. Los partidos son volátiles en sus comportamientos y lealtades, pero no llegan a una situación de inestabilidad que amenace con quebrar el sistema de partidos. La competencia, propia del proceso electoral, no implica que estén divididos. En un proceso electoral, los partidos luchan por los votos, de modo que la utilización de denuncias o desagravios entre los partidos es parte de la dinámica electoral.

La desconcentración del poder, durante el gobierno de Paniagua, todavía es débil, debido al legado de Fujimori. El proceso de descentralización ha dado inicio y los poderes del Estado guardan una independencia que no tenían durante el Fujimorismo. Teóricamente, en este contexto, no habría razón para esperar que se produzcan acciones colectivas por parte del movimiento cocalero, sin embargo, sí las hubo; por ello consideramos que esta variable no ayuda a explicar los hechos.

Las demandas específicas de esta paralización están centradas, principalmente, en los Programas de Desarrollo Alternativo, a los que se les exigía crédito y mercados seguros; pero, además, se exige el retiro de las ONG de la zona, pues, según sostenían los agricultores, los PDA no

habían mejorado las condiciones de vida de quienes participaban en esos programas, sino que, por el contrario, las habían empeorado.

Cuando el malestar sobre los resultados de los PDA se generaliza en la población, se vuelve una bandera de lucha entre los cocaleros³¹ y una forma efectiva de ganar adeptos para la causa; lógicamente, cuanto mayor sea el apoyo de otros sectores, mayores serán los recursos para el movimiento y mayor será la probabilidad de tener éxito.

En cada movilización, la exigencia de paralizar la erradicación forzada es una demanda constante, pero eso no quiere decir que las otras demandas no formen parte importante de las negociaciones.

El 9 de mayo del 2001, el CORAH publica un comunicado en un diario de la zona, informando ³² que, en las Mesas de Diálogo, específicamente en la Comisión de Erradicación, se había aprobado la reducción de los cultivos de coca en las áreas de protección, en los alrededores de las pozas de maceración y transformación de coca en pasta básica. Esta intervención, según el CORAH, era legítima, porque se encontraba en el Parque Nacional Von Humbolt; en cambio, los agricultores opinaban lo

³¹ Casi la mayoría de los asociados han sido beneficiarios en el pasado de los PDA ya sea promovidos por el Ministerio de Agricultura o por las ejecutoras como WINROCK y CARE-CODESU.

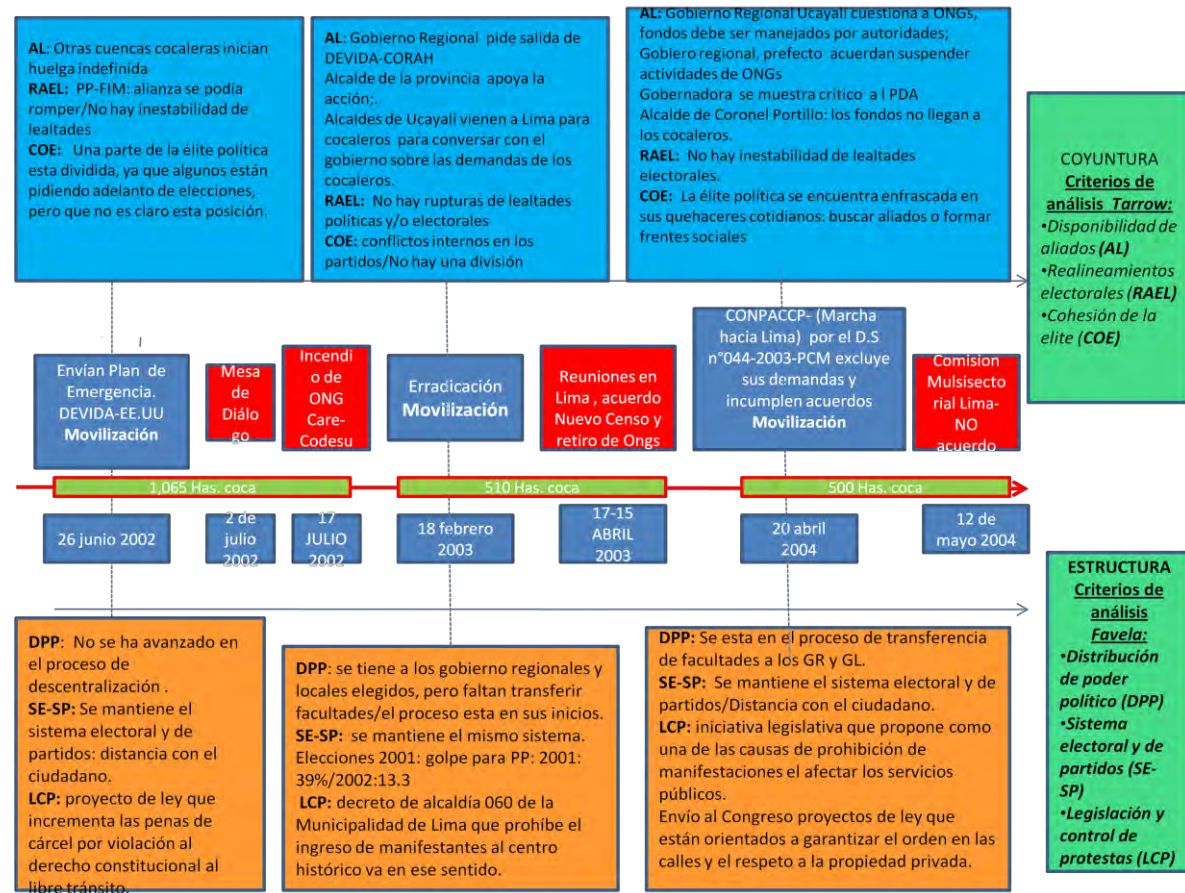
³² Parte del comunicado del CORAH publicado en el Diario La Hora de Pucallpa el 9 de mayo del 2001 "...Cuando tenga que realizar acciones de erradicación definitiva el CORAH tendrán en cuenta los siguientes parámetros; respecto a los derechos humanos, se erradicará toda coca cercana a pozas de maceración e instalaciones vinculadas al procesamiento de droga, ubicadas en áreas de reserva, protegidas, abandonas y/o empumadas. Además las personas erradicadas serán beneficiarios prioritarios de las acciones de desarrollo alternativo y se mantendrá la franja entre media y una hectárea de coca como medio de subsistencia....".

contrario, puesto que esas zonas estaban fuera del ámbito de la erradicación. El Ministerio del Interior manifestó que “no se podía suspender la erradicación”³³, pues esto iría en contra de las leyes, y que el diálogo sólo se daría inicio previa suspensión de las medidas de fuerza.

Los agricultores aceptaron las propuestas de Ketín Vidal, Ministro del Interior, quien les propuso trabajar en la elaboración del Plan de Acción Concertado para la reducción gradual de la hoja de coca; sin embargo, finalmente, las negociaciones se frustraron, debido a que, el gobierno no cedió ante la insistencia de los agricultores en la suspensión de la erradicación forzada, por lo cual se convocó a una nueva medida de fuerza, el 27 de noviembre del mismo año.

³³ Es un argumento constante que utilizan las autoridades amparándose en la ley 22095

Grafico N°7
Trayectoria del movimiento cocalero de Aguaytía durante el gobierno de Toledo (2001-2004).



En este período, la dinámica del movimiento cocalero está marcada, principalmente, por el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado con el movimiento cocalero de Aguaytía, en las Mesas de Diálogo. El Estado asume compromisos que, sabe, no podrá cumplir, pues las demandas de los cocaleros implican un viraje radical de la Política Antidroga.

La presencia de la erradicación explica la movilización del 18 de febrero del 2003. En esta fecha se produce la segunda gran intervención del CORAH en Aguaytía erradicándose 555 Has de hoja de coca. Las demás movilizaciones se explican por la variable “incumplimiento de compromisos en las Mesas de Diálogo”.

La variable “disponibilidad de aliados”, propuesta por Tarrow, es la única que favorece la acción colectiva (la presencia de las demás cuencas cocaleras y la intervención del gobierno regional y de los gobiernos locales de la zona). La propuesta de Favela no ayuda a entender el accionar del movimiento cocalero.

4.3.3.- Trayectoria del Movimiento Cocalero Durante el Gobierno de Toledo.

El proceso de transición democrática mostró las mismas debilidades institucionales de los años anteriores al golpe de Estado de Fujimori: crisis de representación y de legitimidad de los actores políticos, debilidad del Estado y una política económica que no beneficiaba a los más pobres. Durante el gobierno de Toledo se lograron avances parciales y absolutamente insuficientes. La descentralización, la recuperación de la autonomía de las instituciones, los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, sin duda, son logros importantes, aunque muy limitados. En lo fundamental, se mantiene una estructura estatal funcional a un esquema económico que se encuentra agotado como mecanismo de inclusión y de consolidación de la democracia. (Azpur: 2006, 166).

El gobierno de Toledo se inicia con una aprobación del 59%, la cual desciende al 15%, a finales del 2002, y que, en el 2003, no llegaría al 12%. Las explicaciones de su desaprobación son varias: el incumplimiento de sus promesas, su indiferencia frente al salario de los peruanos y su negativa a someterse a la prueba del ADN para comprobar la paternidad de la niña Saraí.

4.3.3.1.- La movilización cocalera del 27 de noviembre del 2001.

Tarrow sostiene que la disposición de aliados, los realineamientos electorales y la coalición de aliados son variables a tener en cuenta para entender los movimientos sociales. En esta oportunidad, el movimiento cocalero no tuvo aliados dispuestos a apoyar la acción colectiva. Las demás cuencas cocaleras no apoyaron sus medidas de lucha.

Durante este período, las lealtades políticas son inestables, debido a la presencia mayoritaria de partidos políticos o movimientos independientes; aunque, a pesar de tal fragilidad, no se puede inferir que éstas son condiciones suficientes para el desarrollo de la acción colectiva. La élite política se encuentra concertando un acuerdo de políticas a largo plazo. Este proceso es conducido por el gobierno, con el fin de comprometer a los líderes políticos a respetar las mismas políticas nacionales, quienquiera que resulte ganador en las elecciones. Con todo, no se podría afirmar contundentemente que la élite política esté unida.

Ahora veamos el tema de la concentración del poder, durante el período de “luna de miel” del gobierno. El compromiso electoral de Toledo fue llevar a cabo el proceso de descentralización; sin embargo, el gobierno no tiene una estrategia clara para conducir este proceso, más bien, opta por crear una serie de organismos, como la Comisión Nacional de Descentralización y la Secretaría Técnica para la Descentralización, ambas con limitadas capacidades para enrumbar el proceso, de modo

que, en la práctica, simplemente terminaban apoyando las medidas del Ministerio de la Presidencia (PCM). Así las cosas, el proceso de descentralización navega a la deriva y está muy lejos de lograr sus objetivos.

Cuando analizamos la autonomía de los poderes del Estado en este período, se percibe una cierta autonomía, por ejemplo, cuando se produce la interpelación a los ministros Olivera, Waisman y Rospigliosi, por el caso de la visita que realiza el abogado Echaíz a Montesinos en la Base Naval del Callao. De este modo, el Congreso cumple con su deber constitucional de fiscalizar la gestión de los funcionarios del Ejecutivo, en clara muestra de su autonomía. No obstante, la independencia de poderes debe descansar, más bien, en los contrapesos que resultan del ejercicio autónomo de las funciones de los diferentes poderes del Estado, lo cual puede apreciarse, por ejemplo, cuando el Ejecutivo es capaz de observar la dación de leyes laborales del Congreso.

El sistema electoral y de partidos se mantiene. En el Congreso, los partidos se ocupan de los casos de corrupción del régimen fujimorista, al interior de sus respectivas comisiones investigadoras.

En plena movilización del 27 de noviembre del 2001, el diálogo continuaba por vía telefónica con Susana Higuchi, presidenta de la Comisión de Desarrollo Alternativo de Lucha Contra las Drogas y Lavado de Dinero. Una comisión de los coccaleros viajó a Lima, por intermediación

de la congresista, para entrevistarse con funcionarios del gobierno, razón por lo cual se suspendieron las medidas de lucha por tres días.

Durante el proceso de diálogo, los agricultores denunciaron que el CORAH continuaba con la erradicación violenta e incluso estaba utilizando productos químicos. El resultado de las conversaciones fue la promesa de la visita a Aguaytía de una Comisión de Alto Nivel, presidida por Vega Llona, para revisar las denuncias de los cocaleros. Una vez llegada la Comisión, ésta se comprometió a verificar la denuncia sobre la utilización de productos químicos por parte del CORAH, en virtud de lo cual se contrataría a una institución internacional para investigar este caso. En cuanto a los proyectos productivos, el gobierno vería la posibilidad de incrementar los fondos para mejorarlos.

Ninguna de las variables propuestas por Tarrow tiene relevancia para entender la acción colectiva durante los primeros meses del gobierno de Toledo. Primero, el movimiento cocalero no contaba con aliados; segundo, las lealtades partidarias, a pesar de ser inestables, no constituían condiciones para la acción colectiva; y, tercero, no se puede afirmar que la élite política estuviese dividida.

De otro lado, el proceso de descentralización está en las mismas condiciones del período anterior, por lo que no estarían dadas las condiciones para la acción colectiva, pues, en teoría, debería existir desconcentración de poderes para que la acción colectiva se manifieste.

Tanto el sistema de partidos como el electoral son los mismos de anteriores procesos electorales. Los partidos políticos continúan desconectados de la sociedad. En resumen, estas variables no son suficientes para entender por qué la acción colectiva se produce en este período.

El contexto local tiene cierta influencia en el origen de la acción colectiva, si pensamos, por ejemplo, en el descontento de los agricultores con respecto a los resultados de los Programas de Desarrollo Alternativo en la zona de Padre Abad. Estas primeras experiencias fueron desalentadoras para seguir participando en los futuros programas. Sin duda, esto influyó en la decisión de muchas comunidades de participar en la Asociación de Cocaleros del Padre Abad.

El nivel de incidencia que estas primeras paralizaciones ejercen sobre las políticas antidrogas es mínima, ya que, como se ha observado, del 30 de octubre del 2000 hasta el 27 de octubre del 2001, las únicas demandas que fueron satisfechas son: la paralización momentánea de las erradicaciones forzadas, algunas obras de electrificación y una filial de ENACO en Aguaytía.

Como se verá más adelante, las demandas cruciales, es decir, aquellas que podrían darle un nuevo rumbo a las políticas, como por ejemplo: legalización de la coca, retiro de las ONG, manejo directo de los fondos de cooperación internacional, jamás podrían ser satisfechas, ya que son

medidas que van en contra de las líneas generales de la Política Antidroga definida por el gobierno³⁴.

Gráfico N°8
Resumen de demandas de los cocaleros y las respuestas del gobierno del período 2001

FECHA Y DURACION	DEMANDAS	REPERTORIO
7 de mayo del 2001 (10 días)	1) Suspenden la erradicación.	Paro Huelga Bloqueo de carretera
	2) Solución a los cultivos alternativos.	
	3) Crédito y mercado seguro.	
	3) Detengan el envenenamiento de los suelos.	
	4) Retiro de las ONG.	
27 de noviembre 2001 (10 días)	1) Suspensión de la erradicación.	Huelga
	2) Declaratoria de emergencia del sector agrario por el Gobierno Regional.	
	3) Descentralización de las oficinas de CONTRADROGAS.	
	4) Funcionamiento del Banco Agrario.	
	5) Retiro del CORAH.	
	6) Instalación de una oficina de ENACO en Aguaytía.	
	7) Legalización del cultivo de la coca.	
	8) Fiscalización de los fondos de Cooperación I.	
	9) Mejoramiento de la carretera Federico B.	
	10) Energía eléctrica para Padre Abad y comunidad.	
	11) Titulación de sus parcelas.	

Fuente: Periódico Ahora, Actas de la Asociación de Agricultores Agropecuarios y Productores de la Hoja de Coca de Padre Abad-Aguaytía.
Elaboración: Propia.

³⁴ Ver Estrategia Nacional de lucha contra las drogas 2002-2007.

Para el gobierno, legalizar el cultivo de la hoja de coca, implica ir en contra del tratado firmado por el Perú en la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde la coca es considerada como una sustancia psicoactiva; de modo que, los Estados deben acatar las normas dispuestas sobre su uso. Por ello, cada vez que los agricultores manifiestan iniciativas para legalizar el cultivo de la hoja de coca, el Estado se excusa en los tratados internacionales contraídos con la comunidad internacional. De ahí que, los movimientos cocaleros buscan, en los diferentes foros nacionales e internacionales, que la hoja de coca salga de esa lista.

La demanda referida al desarrollo alternativo cuestiona que el Estado no controla ni monitorea cómo se llevan a cabo los programas. Los agricultores cocaleros conocen que existen fondos de la Cooperación Internacional destinados para este rubro, los cuales no estarían siendo eficientemente invertidos por las instituciones encargadas de ejecutar los proyectos, toda vez que los resultados de los programas son escasos, tal y como lo explicamos en el capítulo sobre Desarrollo Alternativo. Los agricultores demandan, primero, que los fondos sean fiscalizados y, segundo, que las ONG se retiren, de modo tal que sean los propios agricultores quienes ejecuten los proyectos y administren los fondos. El Estado ha respondido frente a estas demandas mediante citas como ésta:

El 17 de agosto de 1999 se suscribió el Convenio de Donación de Objetivo Especial N° 527-0348 entre la República del Perú y los Estado Unidos...USAID mediante licitación internacional contrató los servicios del Consorcio CARE-CHEMONICS-PLANING ASSITANCE, estos a la vez

han contratado, también mediante concurso público, a las ONGs nacionales que actúan como operadoras del Programa...existen mecanismos de evaluación por parte de USAID y de CONTRADROGAS que se están aplicando a las instituciones paraguayas y a las operadoras. (D3)

Esta es la posición que siempre asume el Estado: un discurso opuesto a los coccaleros, que defiende la transparencia y la legalidad de los programas aplicados en la zona. Jamás se va a reconocer públicamente que los Programas de Desarrollo Alternativo han sido un fracaso.

A raíz de la denuncia sobre el uso de herbicidas para erradicar el cultivo de la coca, los coccaleros exigen la realización de un estudio de suelos. Contradrogas responde que se coordinará con la Subcomisión Investigadora del Congreso para realizar dicho estudio.

4.3.3.2.- La Movilización Coccalera del 26 de junio del 2002.

Sigamos viendo cómo funcionan las variables planteadas por Tarrow. Esta vez, consideremos la disponibilidad de aliados, los alineamientos electorales y la cohesión de la élite política.

En este período, los únicos aliados con que cuenta el movimiento coccalero de Aguaytía son las demás cuencas coccaleras. Los niveles de coordinación se vuelven más eficientes, a medida que todos se van dando cuenta que, uniéndose a estas medidas, llamarán la atención del Ejecutivo.

Los realineamientos electorales no se dan en este período, debido a que no existe ningún hecho que haga posible que varíen las lealtades electorales o las coaliciones partidarias. La coalición PP-FIM, que hizo posible que el oficialismo tenga mayoría en el Congreso, en muchos casos, fue un obstáculo para que el gobierno llegase a concertar con las demás fuerzas políticas, sobre todo con el APRA. En los momentos críticos de este período, como en el Arequipazo (levantamiento de la población arequipeña que se opuso a la privatización de la empresa de electricidad EGASA, de propiedad del Estado), PP veía la posibilidad de romper relación con el FIM, sin embargo, en última instancia, no lo hizo.

Cuando analizamos la cohesión de la élite, en este período de movilizaciones en Lima y en el interior, encontramos, por una parte, que un sector de la élite política solicita el adelanto de las elecciones por la situación de ingobernabilidad que se vivía: sobre todo, luego del “Arequipazo”. Esta actitud de la clase política es contradictoria, porque, en fechas anteriores, sus líderes se habían reunido con el Presidente Toledo para continuar concertando sobre las políticas de Estado, en el contexto del Acuerdo Nacional. Al parecer, la élite política asume un comportamiento volátil, que varía de acuerdo a sus intereses.

Revisemos, ahora, cómo se comportan las variables propuestas por Favela (distribución del poder político, los sistemas electorales y de partidos, acciones de represión contra las protestas), durante este período.

La distribución del poder está en marcha. La Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre descentralización y la Ley de Elecciones Regionales constituyen el inicio de acciones concretas para desconcentrar el poder –aunque todavía no se ha desactivado el Ministerio de la Presidencia ni los CTAR–. Los partidos políticos están en plena elaboración de sus listas para las elecciones locales y regionales que se avecinan en noviembre del 2002; se espera que, para esta fecha, se hayan promulgado las leyes concernientes a implementar y consolidar el proceso de descentralización a través de la elección de autoridades.

Respecto al sistema electoral y de partidos, las estructuras se mantienen, pero el comportamiento de los integrantes del partido es influenciado por el sistema electoral. En el caso del partido de gobierno (PP), se percibe cierta fragmentación.

Dentro de los partidos, existe cierta división entre los congresistas electos por Lima y los congresistas electos por las provincias. Suele suceder que, los congresistas electos por las provincias, son excluidos de la toma de decisiones al interior de sus respectivas bancadas, de modo tal que, aunque la posición que adopta la bancada, muchas veces resulta contraria a los intereses de sus votantes, los congresistas provincianos terminen plegándose al dictamen de la bancada. Indudablemente, éste es el resultado de tener un Congreso unicameral en lugar de uno bicameral.

Ésta es una etapa de intensas movilizaciones sociales, frente a las cuales el Ejecutivo tratará, por todos los medios, de neutralizar las acciones colectivas. Se calificará como “subversivos” a los activistas, desconociendo las legítimas demandas de la población. Se aprobará el proyecto de ley que incrementa las penas de cárcel para todos aquellos que violen el derecho constitucional al libre tránsito. El Ministerio del Interior propone estas iniciativas, asumiendo tácitamente que la única forma de enfrentar a la población movilizada es a través de la represión; en muchas ocasiones, invoca al Ministerio Público a cumplir con su labor y a no entorpecer la labor de la policía en el restablecimiento del orden en las carreteras bloqueadas por los manifestantes.

Después de la movilización del 27 de noviembre del 2001, se establece un período de diálogo que dura 6 meses, para trabajar las demandas planteadas, pero principalmente la investigación sobre la utilización de productos químicos del CORAH en la erradicación de cultivos de hoja de coca. Frente al limitado avance de los compromisos se convoca una nueva movilización.

El 01 de enero del 2002, la Asociación cursa un oficio al zar antidroga Ricardo Vega Llona, por medio de la cual, reclama el cumplimiento de las recomendaciones pactadas en diciembre, producto de la huelga del 27 de octubre del 2001, las cuales estaban referidas a:

- 1) Que el proyecto CORAH remita el Plan Operativo de las áreas de erradicación de los últimos 3 años.
- 2) Contratación de una institución internacional para que investigue el uso de agroquímicos en la erradicación de la hoja de coca.
- 3) Publicación de la lista de los proyectos de los PDA ejecutados con diferentes instituciones.
- 4) Instalación de la Comisión para estudiar las propuestas o sugerencias del convenio de donaciones entre el Perú y EE. UU. en materia de erradicación.
- 5) Que el CORAH pase al Ministerio de Agricultura.

Todos estos temas de conversación estaban lejos de cumplirse, porque no eran parte de los ejes de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, la cual no consideraba a los agricultores como participantes activos de la Política Antidroga sino como receptores pasivos.

Para el 23 de Marzo, aprovechando la presencia de George Bush en el Perú, la Asociación elabora el Plan de Emergencia para atender la problemática de la erradicación de la hoja de coca, donde establece recomendaciones sobre este tema. Lo único que recibe son felicitaciones de las autoridades, pero las alternativas conversadas no se ponían en práctica. Ante ello, convocan al paro del 26 de junio del 2002, donde la demanda principal es el retiro de las ONG:

Entre los organismos cuestionados se encuentran Windrock Internacional, CARE, CEDRO, Acción Agraria, INADE, Prisma, CODESU y ADES. Según el dirigente cocalero estas organizaciones han gastado ingentes cantidades de dólares en una suerte de convenios sin que hasta la fecha la condición del agricultor y del productor de hoja de coca haya cambiado de manera positiva. (P6)

Posteriormente, ante el suceso del 17 de julio (incendio el local de la ONG CARE-CODESU), se abre una mesa de diálogo que no logró ningún objetivo.

Los denunciados quienes pertenecen a la Asociación de Productores de Hoja de coca de la provincia de Padre Abad... se retiraron de la reunión y se dirigieron a los locales de CARE y CODESU, organismos gubernamentales, donde ingresaron y empezaron a realizar daños materiales en los vehículos de propiedad de dichas instituciones; constatándose por los efectivos policiales que los vidrios de las ventanas se encontraban rotos ...la camioneta de doble cabina fue completamente destrozada y quemada como producto de los disturbios provocados por los sujetos que indican pertenecer a la Asociación de Cocaleros. (D4)

Este repertorio, usualmente, no es utilizado por los agricultores cocaleros, pero durante las acciones colectivas, es probable que participen actores ajenos a la demanda de los cocaleros, que propician los actos violentos y se benefician de ellos. Esto, necesariamente, repercute en la posibilidad de contar con aliados, tal y como se muestra en la cita:

Existe una gran inquietud y preocupación en el seno de nuestras organizaciones agrarias con respecto al hecho acontecido el 17 de julio en las oficinas de CODESU, en la provincia de Padre Abad, hecho por los agricultores de Hoja de coca, quienes tomándose el nombre de los productores agrarios organizados y pretendieron confundir a la opinión pública y las autoridades...que son agitados por personas que no tienen nada que ver con la agricultura y se hacen pasar como grandes dirigentes. (D5)

En la zona de Aguaytía vamos a encontrar una serie de organizaciones productivas que simpatizan con el movimiento cocalero, pero que

discrepan en el cómo hacer llegar las demandas. Son aliados potenciales, ya que están integrados por ex cocaleros.

En las conversaciones previas a este suceso, los agricultores cocaleros del Padre Abad, habían manifestado su compromiso de participar activamente en el proceso de autoerradicación gradual y concertada, e incluso, se había elaborado un cronograma de trabajo desde el 15 de agosto.

La Asociación acepta esta propuesta por la presencia, en el gobierno, de Hugo Cabieses, aliado de los agricultores cocaleros, pero una vez que éste sale, los agricultores desconocen el pacto; no obstante, los convenios marco continuaban firmándose con las diferentes comunidades.

Posteriormente, suceden hechos como la publicación del comunicado de DEVIDA, del 9 de diciembre, en el que señalan la presencia de “pseudodirigentes” que se oponen a los Programas de Desarrollo Alternativo Participativo (PDAP). Frente a estos hechos, la Asociación exige la renuncia del representante de DEVIDA en Aguaytía.

Esta movilización se produce porque la Asociación de Cocaleros de Aguaytía percibe la indiferencia de DEVIDA y de la Embajada de Estados Unidos frente a su propuesta sobre proyectos productivos. Para embarcarse en esta iniciativa de acción colectiva, fue importante tener el apoyo de las demás cuencas cocaleras. Indudablemente, la presencia de

Bush en el país, también influyó en que las cuencas cocaleras hagan visible su malestar por la Política Antidroga implantada por los EE. UU. en el Perú. Estos son factores que pesan para entender la movilización en este período. La inexistencia de lealtades políticas o la división de la élite política son marginales para entender la movilización cocalera.

4.3.3.3.- La Movilización Cocalera del 18 de febrero del 2003.

Pese a que el plan Piloto del PDAP se estaba aplicando en el Valle de Aguaytía, con resultados positivos para DEVIDA, EE. UU. reduce los fondos de apoyo a la lucha contra la drogas. En este contexto, el 17 de febrero del 2003, se produce la incursión del CORAH en la comunidad de Alto Shambillo, zona piloto del Programa de Desarrollo Alternativo Participativo (PDAP), produciéndose actos violentos contra campesinos y autoridades³⁵.

Por lo menos un campesino muerto de un balazo y otro herido es el resultado del enfrentamiento entre cocaleros y personal de erradicadores del proyecto CORAH en la localidad de Shambillo (...) una fuente citó que uno de los trabajadores del CORAH fue acorralado por los agricultores y en defensa de su integridad habría hecho uso de un arma de fuego. (H3)

El CORAH interviene unilateralmente, sin ninguna coordinación con DEVIDA, desacreditando el trabajo de esta institución. Frente a estos hechos, el 18 de febrero del 2003, se realiza un paro en todas las

³⁵ El memorial de la Asociación con fecha, 14 de febrero describe los hechos: "...El 13 y 14 de febrero resulto herido de bala el Sr. Esteban Daza Cristobal, así mismo la Sra. Gloria Elizabeth Sudario Silvestre, fueron agredido brutalmente con patadas y puñetes por el personal del CORAH y también el Teniente Gobernador y el Agente Municipal del caserío de Alto Shambillo fueron enmarcados por el personal del CORAH...".

cuenas cocaleras, produciéndose la detención del presidente de la CONPACCP³⁶, Nelson Palomino, en la ciudad de Aguaytía, por provocar desmanes en contra de la tranquilidad pública y bajo la imputación formal de apología al terrorismo.

El repertorio de los cocaleros se vuelve más violento cuando los pobladores de Aguaytía se muestran reacios a respetar el paro. Conforme pasan los días y el paro se va prolongando, la población puede llegar a enfrentarlos.

Moradores de la villa Aguaytía, capital de la provincia del Padre Abad, informaron que desde ayer la capital provincial ha sido tomado por los cocaleros, que amenazaron con saquear tiendas y cuanto establecimiento se resista al cierra puertas...los empleados y funcionarios de DEVIDA y del CORAH temen por sus vidas por estar cercados por los huelguistas. (H4)

En estas circunstancias, sale a relucir el odio que guardan los agricultores cocaleros contra los funcionarios del Estado, quienes estarían “viviendo con la plata del agricultor”.

El enfrentamiento empezó a las 2 de la mañana aproximadamente después que la policía rescató a los empleados y funcionarios de CORAH y DEVIDA cercados en sus respectivos hoteles imposibilitados hasta de tomar sus alimentos, amenazados que serian tomados de rehenes para negociar con el gobierno su plataforma de lucha. (H5)

³⁶ La CONPACCP (Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuenas Cocaleras del Perú) se forma el 20 de enero del 2003. Esta organización se forma de manera casual, ya que las primeras conversaciones de sus líderes fueron producto de las reuniones que mantenían con DEVIDA. La formación de esta organización representa un nuevo intento de integrar a las 14 cuenas cocaleras, luego del fracaso de los dos intentos previos: la CNDPCH (Coordinadora Nacional en Defensa de los Productores y Consumidores de Hoja de coca), que fue impulsada por la FEPCACYL en 1979 y 1980, con la finalidad de hacer frente a la Ley 22095 promulgada por el gobierno militar de Morales Bermudez, y la CONAPA-PERU, formada en 1988, que feneció víctima de su propia inactividad, en el gobierno de Fujimori.

En esta oportunidad, se exige el cese de la autoerradicación voluntaria promovida por el PDAP –por considerarla violenta, ya que los agricultores eran obligados a participar–, el retiro de las ONG y la liberación de Nelson Palomino. Unidas a estas demandas generales para todas las cuencas, aparecen demandas más locales que se van sumando, como la exigencia de una universidad en la zona, titulación de tierras y electrificación de zonas alejadas. Frente a la demanda de obras en la zona, los gobiernos locales se vuelven aliados estratégicos, ya que funcionan como interlocutores válidos que, no pocas veces, cuestionan y desmienten las apreciaciones de otros funcionarios del Estado, sobre el movimiento cocalero:

En la concentración en la Plaza de Armas de Aguaytía fue notoria la presencia del alcalde Luis Maguiña y su director municipal Jorge Rengifo pronunciándose abiertamente a favor de la huelga (...) desmintió al premier Solari señalando que la huelga cocalera es promovida por un grupo de dirigentes, quienes a su vez son manejados por el narcotráfico y terrorismo que impera en el lugar. Dijo que tal aseveración es totalmente falsa y descabellada. (P7)

Las organizaciones productivas se pliegan a las demandas de los cocaleros, en particular, aquellas vinculadas a la realización de más obras y a la mayor presencia del Estado en la zona. Es el caso del Comité Central de Palmicultores de Ucayali, una de las organizaciones productivas de mayor presencia en la zona, que se pronuncia a favor de la medida mediante un comunicado:

Que uno de los puntos del reclamo que solicitan los productores cocaleros esta el mantenimiento de las carreteras a Pucallpa,

Uchiza, Tocache, Aguaytía, Puerto Inca, Tournavista... lo cual beneficia a los comités que están operando con los cultivos alternativos...que es obligación prioritaria que las autoridades sectoriales den atención y diálogo a nuestros hermanos agricultores en huelga, por lo que solicitamos a la brevedad posible la solución a este problema. (C4)

En este período, no se producen elecciones o algún hecho que pueda configurar una ruptura de lealtades; sin embargo, se percibe que estas lealtades son frágiles, ya que no tenemos partidos consolidados. En tiempos no electorales, la actitud de los integrantes de los partidos va a depender de otros factores, como la obtención de puestos en el gobierno, el sentirse marginados en sus propios partidos o el recibir favores judiciales a cambio de una actitud pro gobiernista.

Durante este período, los partidos políticos están enfrascados en conflictos internos. Por un lado, tenemos al partido de gobierno (PP) tratando de poner orden en su bancada, en medio de la pugna interna por acceder a los puestos públicos. De igual forma, Unidad Nacional enfrenta problemas internos de disputa por el liderazgo. A diferencia del APRA, que pasaba por su mejor momento, tras la llegada de su líder, Alan García. En conclusión, percibimos que la élite política está batallando por su unidad interna, antes que por una unidad de partidos.

Antes de la elección de los gobiernos regionales y locales (noviembre del 2002), se dieron una serie de normas: Ley de Bases de la Descentralización, Ley de Demarcación y Organización territorial y la Ley Orgánica de gobiernos Regionales. Se ha creado la institucionalidad requerida y se cuenta con los gobiernos elegidos por voto popular.

Además, se tiene pensado transferir, a los gobiernos regionales y locales, los programas de lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión productiva. El proceso está en camino, pero lentamente, por la falta de liderazgo del Ejecutivo.

Este espacio creado significará el apoyo, de un cierto sector del liderazgo político, a las demandas de los agricultores cocaleros. A partir de este período, los cocaleros van a tener como aliados a los gobiernos regionales y locales, quienes serán los más críticos contra los Programas de Desarrollo Alternativo y la utilización de la represión para enfrentar las movilizaciones.

Las elecciones regionales y locales de noviembre del 2002 significaron un duro golpe para el partido de gobierno, que sólo obtuvo el 13.4% de la votación regional, concentrada en las regiones de Ancash, Amazonas y el Callao. En el 2001, Perú Posible obtuvo el 39% de los votos, en la provincia de Padre Abad; sin embargo, esta vez, sólo alcanzó un 13.3%.

Estos números reflejan que el partido de gobierno ha perdido sintonía con la población de Padre Abad, debido a la desatención de las demandas de la población y al incumplimiento de las promesas electorales asumidas en la campaña electoral del 2001. Evidentemente, la población evalúa al gobierno a través de las elecciones y trata de influir, por medio de ellas, en las políticas públicas.

El Estado enfrenta a los movimientos sociales a través de la represión y la dación de leyes de prohibición de manifestaciones en las calles. La

ordenanza municipal o decreto de alcaldía 060 de la Municipalidad de Lima que prohíbe el ingreso de manifestantes al centro histórico va en ese sentido.

4.3.3.4.- La Movilización Cocalera del 20 de abril del 2004.

Las condiciones políticas continúan invariables, salvo algunas situaciones que no tienen el impacto necesario para considerarlas como la crisis política que podría dar cabida a una acción colectiva. El arresto de César Almeyda, asesor del Presidente Toledo, por actos de corrupción, o la salida de las cárceles de algunos personajes vinculados a la mafia fujimontesinista, son hechos que no podríamos considerar como situaciones críticas para el país.

Esta paralización no era resultado de las acciones del CORAH, sino que fue acordada por las diferentes cuencas cocaleras en el II Congreso de la CONPACCP, realizado en Lima, el 2 de febrero.

Como antesala a la paralización, el presidente del Gobierno Regional de Ucayali, Edwin Vásquez, denuncia que el dinero de la Cooperación no llega a los agricultores y que muchos de los proyectos aplicados por las ejecutoras, como Chemonics, son elaborados en el gabinete, sin tomar en cuenta a los agricultores. Además, sostiene que ese fondo debe ser administrado por los gobiernos regionales y locales.

Además, se produce una avalancha de críticas a los Programas de Desarrollo Alternativo, por parte de varios funcionarios locales. Una actitud nunca antes vista. Por ejemplo, la gobernadora del distrito de Curimana manifiesta:

Qué ha hecho DEVIDA en todo Padre Abad, hemos firmado con el gobierno el acuerdo de reducción gradual y concertado, pero a cambio nos darían los cultivos alternativos de que vivir, sin embargo se hizo la reducción total por 180\$ los agricultores dejaron de sembrar coca, pero no tienen nada, no hay desarrollo alternativo... solo a uno han llevado maíz y caraola, por ello como madre y agricultora llamo la atención de la prensa. (P8)

Posteriormente, vendrán las críticas del alcalde de la provincia de Coronel

Portillo, Luis Valdez Villacorta:

Considero que el apoyo internacional que llega a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, no está siendo usado correctamente, que se hace notorio con las huelgas y paros porque gran porcentaje del dinero no llega directamente al campesino productor de hoja de coca de la provincia de Padre Abad. (P9)

La posición de estas autoridades legitima las demandas de los cocaleros y convierte a los gobiernos locales y regionales en sus mejores aliados, ya que conocen su realidad y, por lo tanto, comprenden mejor sus demandas.

En este período no se producen elecciones y tampoco ningún hecho que produzca un cambio drástico en las lealtades al interior de los partidos políticos, razón por la cual, no son considerados como factores desencadenantes de acción colectiva alguna.

La élite política se encuentra concentrada en sus quehaceres internos, como definir las cabezas de las dirigencias de sus respectivos partidos o buscar posibles aliados, como lo hace el APRA, convocando a los diferentes actores políticos y sociales, bajo el llamado Frente Amplio. Por

su parte, los partidos de oposición tratan de formar una coalición (el APRA y UN) para dirigir la mesa directiva del Congreso. Por lo tanto, es evidente que la élite política no se encontraba dividida; se trata de una variable marginal para entender la acción del movimiento cocalero.

Respecto a la distribución del poder, el proceso de descentralización se encuentra en la fase de transferencia de los programas del MIMDES, los programas de complementación alimentaria que estaban a cargo del PRONAA y los proyectos de infraestructura a cargo de FONCODES. Este proceso implicaba que los municipios tuviesen que acreditar cierta capacidad de manejo de los programas y proyectos. La cantidad de municipios que logró obtener la acreditación, apenas representaba el 35% y el 26% del presupuesto del PRONAA. En el caso de los proyectos de infraestructura, éstos representaban el 15% de los municipios y un 14% del presupuesto de FONCODES. De este modo, los municipios demostraban su incapacidad para manejar estos presupuestos y hacían que el proceso esté muy lejos de concretarse. De ahí que no sea una variable que deba tomarse en cuenta para entender al movimiento cocalero en este período.

Respecto al sistema electoral y de partidos. No se produce ninguna elección en este período y no hay cambios en las reglas en el sistema electoral. Es una variable marginal a la dinámica del movimiento.

Finalmente, el ejecutivo enfrenta las movilizaciones sociales a través del endurecimiento de penas y la dación de leyes que prohíben estos tipos de acciones colectivas como el bloqueo de pistas y carreteras³⁷.

4.3.3.4.1.- La Marcha de Sacrificio a Lima.

El paro se realizó el 20 de abril y fue convocado por la CONPACCP. Las movilizaciones se iniciaron con marchas pacíficas en las ciudades de Aguaytía, Tingo María y Huánuco. La decisión de realizar la marcha no pasó por la aprobación de todas las cuencas cocaleras³⁸, sino por el impulso de algunos líderes de la CONPACCP; sin embargo, el sentimiento de hacerle frente al gobierno por las demandas insatisfechas era *vox populi* en todas las cuencas cocaleras.

Uno de los dirigentes de la Asociación de cocaleros de Aguaytía, Flavio Sanchez sostiene:

Estamos haciendo la huelga porque estamos cansados con Nils Ericsson con quien hemos firmado actas, acuerdos que no se han cumplido por lo que pedimos conversar con el jefe del Gabinete ya que DEVIDA depende de la PCM. (P10)

Estas apreciaciones se entrecruzan con las razones esgrimidas por la dirigencia nacional.

³⁷ El Ejecutivo presentó una iniciativa legislativa que proponía como una de las causas de prohibición de manifestaciones el afectar los servicios públicos. Igualmente, envió al Congreso proyectos de ley que estaban orientados a garantizar el orden en las calles y el respeto a la propiedad privada.

³⁸ Las dirigencias de Cuzco, Ayacucho y Huánuco, discreparían sobre la forma de hacer llegar estos petitorios y cómo negociar.

Para enfrentar a los medios de comunicación de Ayacucho que nos comenzaron a satanizar de ignorantes, narcotraficantes y terroristas para demostrarles lo contrario, decidimos salir en marcha de sacrificio hacia Lima, Dijimos: hagamos una marcha de sacrificio para que todo el mundo vea que somos pacíficos. (Cabieses 2007: 228)

Las razones para realizar esta acción son varias, pero todas ellas confluyen en la necesidad que tienen los cocaleros de hacerse notar ante las autoridades -a través de sus demandas- y ante la sociedad –a través de su presencia física y de sus actos- porque sostienen que el país, principalmente Lima, los ignora, no entiende su realidad.

Nadie llega por ahí. La gente de la selva está muy olvidada por el Estado desde hace mucho tiempo y creo que con nuestras marchas y movimientos tendremos la oportunidad de que el Perú se entere cómo estamos viviendo. (Cabieses: 2007: 231)

La articulación del movimiento cocalero de Aguaytía con la CONPACCP produce cambios en su dinámica de acción, tradicionalmente circunscrita al espacio local, que ahora se proyectaba al espacio nacional. Formar parte de la CONPACCP³⁹ le permitía al movimiento, primero, hacer frente al Estado con más fuerza y, segundo, apropiarse de las demandas nacionales como la Ley de la Hoja de Coca, la renuncia a la Convención Única de Estupefacientes de New York de 1961 y la elaboración de un nuevo empadronamiento, entre otras.

³⁹ La CONPACCP, está integrada aproximadamente por 25,500 agricultores procedentes de Apurímac-Ene (11,000), Alto Huallaga-Uchiza (2,000), Alto Huallaga Pto Pizana (1,500), Alto Huallaga-Aucayacu (3,000), Alto Huallaga-Tingo María (3,000), Aguaytía (1, 200), Pichis Palcazo (1,000) Monzón (2,500), Jaen San Ignacio(260). También forman parte de esta organización agricultores que no necesariamente son cocaleros, como los agricultores de Arequipa y los ronderos de Cajamarca. Los agricultores de Monzón no forman parte de la organización.

El integrar una organización nacional no implicaba, necesariamente, que la dinámica del movimiento cocalero de Aguaytía haya estado condicionada a los objetivos de la CONPACCP, pues, en ocasiones, primaban los intereses inmediatos de las bases o de las dirigencias locales sobre las nacionales. Ésta es una de las debilidades de la CONPACCP y del mismo movimiento cocalero de Aguaytía, ya que mientras no depongan sus intereses locales, no se avizora un movimiento cocalero nacional fuerte, que satisfaga las demandas particulares de todas las cuencas cocaleras.

Mientras se realizaba la marcha hacia Lima, los agricultores que se quedaban en sus zonas de origen, realizaban marchas pacíficas; por ejemplo, la que se llevó a cabo en Aguaytía:

En el segundo día de huelga indefinida los productos de hoja de coca de Padre Abad, ayer realizaron una marcha pacífica en Villa Aguaytía, capital provincial. Resguardados por efectivos policiales marcharon desde Barrio Unido que se encuentra en el kilómetro 162 de la carretera Federico Basadre que se encuentra totalmente bloqueada, recorrieron las principales calles de Villa Aguaytía sin crear mayores dificultades.(H6)

Las bases partieron desde Apurímac-Ene y el Alto Huallaga-Aguaytía hacia Lima. La marcha pacífica empezó aproximadamente con 15000 personas, pero solamente llegaron 5000, debido al cansancio que se apoderó de la mayoría de los agricultores cocaleros.

Desde ayer alrededor de 1,500 agricultores de Padre Abad se encuentran en Lima dispuestos a iniciar hoy diversas actividades en busca de la atención de los legisladores y del presidente de la República... ellos han sido albergados en el mercado mayorista de Santa Anita en Lima y tienen previsto estar hoy desde las 9.00 am en la sede del Palacio de Justicia. (H7)

En su travesía hacia Lima, las frases que aparecían en sus pancartas eran bastante elocuentes: “la coca es peruana y no de los gringos”, “la coca es desarrollo para los peruanos”, “Nelson Palomino, Libertad”, entre otras.

Una vez en Lima, la reacción del gobierno no fue contundente; por un lado, el Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, se mostró reacio al diálogo; en cambio, el Ministro de Agricultura, León Rivera, propuso la formación de una comisión mediadora, lo cual provocó un enfrentamiento de opiniones al interior del gobierno, con respecto a cómo tratar el problema. La dirigencia, encabezada por Nancy Obregón y Elsa Malpartida, buscó el diálogo en todo momento e hizo llegar sus demandas al Congreso de la República, el cual se comprometió a formar una Comisión Multisectorial; sin embargo, el gobierno, en todo momento, se hizo de la vista gorda, planteando que se podría dialogar, pero sobre propuestas razonables⁴⁰. Ninguna de las instituciones involucradas (Congreso, Presidencia de Consejo de Ministros, DEVIDA), mostraba interés en solucionar las demandas. La actitud del Primer Ministro, Ferrero, muestra esta situación:

⁴⁰ Esta visión sobre las demandas de los cocaleros en el gobierno, era defendida por Fernando Rospigliosi, quien sostenía entre una de las afirmaciones, que los Programas de Desarrollo Alternativo (PAD) funcionan eficientemente.

Yo no voy a hacer intermediario de nadie, para eso están los representantes del gobierno; el Ministerio de Agricultura, los representantes del Ministerio del Interior y de DEVIDA (P11).

Esta situación provocaría que los agricultores cocaleros, que se habían quedado en las cuencas, tomaran “medidas de apoyo”. Sucesos como el enfrentamiento entre la policía y los agricultores en Aguaytía, por la intención de tomar la ciudad, o el bloqueo de carreteras en Huánuco, son muestras de la capacidad de acción del movimiento cocalero nacional.

La respuesta del gobierno frente a este tipo de acciones no ha sido otra que la represión, aduciendo que el Estado debe velar por la seguridad de todos los peruanos; por lo cual, se enviaron grandes contingentes armados, de la policía y del ejército, para enfrentar estas acciones. Ésta es la única forma que conoce el gobierno para hacer frente a las movilizaciones, demostrando su ineptitud para afrontarlas políticamente⁴¹.

No se llegó a ningún acuerdo, la Comisión Multisectorial no sirvió para estos fines, pero se llegó a conversar con el Ministerio de Agricultura, León Rivera y finalmente con el Presidente de la República, Alejandro Toledo. Se trató de hacerles firmar un decreto supremo, a lo cual se negaron; finalmente, los agricultores cocaleros decidieron retirarse. Para muchos agricultores cocaleros, el resultado general de esta marcha fue positivo, porque lo que se buscaba no era tanto resolver sus demandas, sino hacer notar su presencia ante la sociedad.

⁴¹ Es moneda corriente que, en América Latina, los gobiernos utilicen la represión para hacer frente a las movilizaciones que suscita el descontento de los ciudadanos por la aplicación de las políticas neoliberales y antidrogas.

Ellos ganaron bastante confianza, ganaron más del 30% de aceptación en Lima y es lo que a ellos les enorgullece, no podemos decir que no hemos ganado nada, hemos ganado. En las encuestas tenemos más del 30% de aceptación, estamos arriba del presidente. Tenemos apoyo, aceptación, hemos logrado algo, se sentían alegres aunque no hayan logrado las demandas de la plataforma de lucha. (E4)

Ahora bien, ¿cómo se explican estas acciones? Creemos que, durante estos años, la CONPACCP, organización que agrupa a todas las cuencas cocaleras, tiene un alto nivel de influencia en la decisión de las acciones colectivas, particularmente, en el caso del movimiento cocalero del Padre Abad, pero también sobre las otras cuencas. Esta influencia no se centra en la capacidad de la organización misma, sino en que muchos de los líderes de las diferentes cuencas cocaleras son dirigentes de la CONPACCP.

Cuadro N°9
Resumen de demandas de los cocaleros y las respuestas del gobierno del período
2002-2004

FECHA Y DURACION	DEMANDAS	REPERTORIO
26 de junio 2002 (7 días)	1) Piden principalmente el cese de la erradicación.	Paro
	2) Trato directo del gobierno con los agricultores.	Bloqueo de carreteras
	3) Reestructurar DEVIDA.	
	4) Exigen el retiro de las ONGs; CARE-CODESU y Acción Agraria.	Toma y saqueo del local de ONG
	5) El programa del PDA sea manejado por la Sub-región-USAID y agricultores.	CARE-CODESU
	6) Mantenimiento de la carretera Federico Basadre.	
	7) Titulación de tierras.	
	8) Apoyo en créditos.	
18 de Febrero 2003 (11 días)	1) Cese de la erradicación forzada y de la autoerradicación.	Huelga
	2) Retiro inmediato del CORAH, de DEVIDA y de las ONG.	Bloqueo de carretera
	3) Banco Agrario.	Toma de la ciudad de
	4) Mejores precios para los productos tradicionales.	Aguaytía
	5) Creación de una universidad.	
	6) Modificación de la Ley 22095.	Intento de toma de un
	7) Electrificación de las provincias.	Hotel (*)
	8) Atender sus propuestas de proyectos productivos.	
	10) Libertad de Nelson Palomino.	
	11) Que el apoyo económico internacional sea manejado por los agricultores pero supervisados por DEVIDA.	

21 de abril 2004 (40 días)	1) Cese de la erradicación forzada y de la autoerradicación.	Marchas en la ciudad de Aguaytía
	2) Liberación de Nelson Palomino.	
	3) Nuevo empadronamiento.	
	4) Ley del cultivo de la coca.	
	5) Retiro de DEVIDA, de CHEMONIS y de las ONG.	
	6) Manejo de los fondos por los agricultores.	
	7) Investigar las concesiones forestales.	
	8) Cese de juicios a los dirigentes cocaleros.	Marcha pacífica hacia Lima
	9) Retiro de la DEA y del CORAH.	
	11) Indemnización a los agricultores que han sido afectados por la erradicación compulsiva.	
	12) Que los gobiernos regionales y locales declaren a la hoja como patrimonio de las cuencas cocaleras.	
	13) Investigar la relación de los beneficiarios de los PDA.	

Fuente: Periódico Ahora, Actas de la Asociación de Agricultores Agropecuarios y Productores de la Hoja de Coca de Padre Abad-Aguaytía, y comunicados de la CONPACCP.

Elaboración: Propia.

(*) Se intentó tomar de rehenes a los trabajadores y funcionarios del CORAH y DEVIDA.

(**) Es una demanda que incumbe principalmente a los gobiernos regionales ubicados en las 14 cuencas cocaleras del Perú.

Las demandas de los paros de 2002 y 2003 son, principalmente, exigencias locales, pero que son influenciadas por las demandas nacionales de la CONPACCP, como la modificación de la Ley 22095 y la liberación del líder cocalero, Nelson Palomino. Con ello, se busca insertar, en la agenda local, las demandas nacionales de la CONPACCP. En la movilización del 2004, la marcha hacia Lima, las demandas son – principalmente– nacionales y abarcan los intereses de todas las cuencas cocaleras del Perú.

Un punto común a todas estas demandas es el rechazo tanto a la erradicación forzada como a la concertada. Usualmente, cuando se realizan las paralizaciones, la primera exigencia es el cese de la erradicación forzada, pero sólo se consigue un cese temporal, que dura mientras dure el dialogo. Se han dado casos en los cuales, a pesar del acuerdo entre las partes, la erradicación ha proseguido; esto se debe a que el CORAH no participa en las Mesas de Diálogo, por lo cual termina desconociendo los acuerdos que toma DEVIDA con los cocaleros.

CONCLUSIONES

1) Las acciones de los movimientos sociales no han tenido influencia sobre la Política Antidroga por diferentes factores. Por un lado, por la influencia de EE. UU, actor externo, sobre el Estado, en la elaboración y ejecución de la Política, lo cual vuelve imposible cualquier modificación de la misma. Por otro lado, el movimiento cocalero no ha tenido la suficiente capacidad de presión, a través de la acción colectiva, para que el Estado plantee una posición, autónoma, respecto a la Política Antidroga.

2) Tanto la Política Antidroga, a través de sus Programas de Desarrollo Alternativo, como la erradicación forzada, han sido factores que, en vez de coadyuvar a una mejor relación entre el Estado y la Asociación de Cocaleros de Aguaytía, han deteriorado esta relación. Por un lado, son deficientes los resultados obtenidos en los Programas de Desarrollo Alternativo, basta poner como ejemplo a las comunidades de Shambillo y Huicoca. Por otro lado, medir el éxito de la política antidroga a través de la erradicación forzada, no hace sino crear las condiciones para el enfrentamiento del agricultor cocalero contra el Estado, ya que la erradicación afecta directamente tanto al agricultor legal como al ilegal.

3) La formación de la Asociación de Aguaytía se debe principalmente a la necesidad de los cocaleros de hacer frente al Estado a través de una organización que sea reconocida legalmente como representante de los agricultores cocaleros. Los gobiernos han mantenido la actitud ambivalente de reconocerlos como agricultores y, a su vez, como narcotraficantes. Se ha encontrado que las comunidades participan en la organización porque ésta les provee de un “seguro” para que la coca no sea erradicada, según una lógica de costo-beneficio. El participar les asegura que su coca no será erradicada y, al mismo tiempo, que no serán considerados como narcotraficantes por el Estado.

4) La estructura de oportunidades políticas (EOP), perspectiva de análisis utilizada para esta investigación, no llega a explicar la dinámica del movimiento cocalero de Aguaytía. Por un lado, las variables propuestas por Tarrow (disponibilidad de aliados, alineamientos electorales y cohesión de la élite) no son suficientes para entender su dinámica. Parece ser que estas variables funcionan mejor en sistemas más institucionalizados que el nuestro. Nuestros partidos políticos muestran una fragilidad institucional tal que las variables utilizadas no son capaces de explicar el fenómeno que estamos estudiando. Por otro lado, las variables planteadas por Favela (distribución del poder político, sistema electoral y de partidos, legislación e instituciones relacionadas con la vigencia y control de protestas) explican la dinámica del movimiento cocalero de Aguaytía, específicamente en contexto de regímenes autoritarios, como lo fue el Fujimorismo, pero este enfoque se muestra

deficiente cuando se trata de regímenes democráticos, incluido el proceso de transición.

Sin embargo, encontramos dos variables que sí son influyentes en el accionar del movimiento cocalero. Por un lado, la erradicación forzada, que explica, en buena parte, el accionar del movimiento cocalero durante Fujimori, Paniagua e inicios del gobierno de Toledo. La otra variable que explica el accionar del movimiento cocalero durante el gobierno de Toledo es el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en las Mesas de Diálogo. Es una constante que se repite durante el actual gobierno.

5) Las acciones colectivas no han logrado presionar a los gobiernos de Paniagua y Toledo para darle un giro a la política. La utilización de mesas de diálogo como proceso de negociación de las movilizaciones ha servido más a los intereses de los gobiernos de paralizar momentáneamente la acción colectiva, que para lograr satisfacer las demandas de los movimientos cocaleros. El Estado ganó porque no cedió y el movimiento cocalero perdió porque no logró que el Estado atendiera sus demandas principales, lo cual pudo haberle dado un giro a la política antidroga.

6) Las movilizaciones pueden ser un arma de presión de los movimientos cocaleros contra el Estado, pero dejan de ser efectivas cuando se vuelven previsibles. Se produce un círculo vicioso, en el cual todos los actores predicen el desenvolvimiento de los hechos: demanda-movilización-

represión-diálogo. Esta fue una constante durante el período 2000-2004, en el cual se observa un aprendizaje de relación conflictiva entre el Estado y el movimiento cocalero. El Estado utiliza, como estrategia de relación, por un lado, la represión y, por otro lado, el diálogo, a través de mesas de negociación. El movimiento cocalero utiliza, además del diálogo, repertorios de confrontación (toma de carreteras, de ciudades, etc.).

BIBLIOGRAFIA

AHORA Periódico. Pucallpa.

ARNOLD, Denise y Alison SPEDDING

2005 *Mujeres en los movimientos sociales en Bolivia 2000-2003*. La Paz: CIDEM-ILCA.

AUYERO, Javier

2002 "Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina". *Desarrollo Económico*. Buenos Aires, julio-setiembre, Vol.42, número166, pp. 187-206.

AVRITZER, Leonardo

2000 "Teoría Democrática, esfera pública y deliberación". *Metapolítica* Buenos Aires, abril-junio, Vol.4, número 14, pp. 55-64.

BALLON Echegaray, Eduardo

2002 "El toledismo y el movimiento social". *Perú Hoy*. Lima, DESCO.

BLUMER, Herbert

1982 *El interaccionismo simbólico: perspectiva y método*. España: Hora S.A

BOBEA, Lilian

1996-97 "De la protesta a la propuesta: articulaciones entre los movimientos populares y el Estado en la República Dominicana". *The Latin American Program* N° 234.

BONAMUSA, Margarita

1994 "Movimientos sociales: organización y estructura de oportunidad Política". *Análisis Político*. Setiembre-diciembre, número 23.

BOTTOMORE, Tom y Robert NISBERT

1983 *Historia del análisis sociológico*. Buenos Aires: Amorrortu, Editores.

CABIESES, Hugo

2004 "Perú: Luchas cocaleras y gobernabilidad". En: Movimientos cocaleros en el Perú y Bolivia; coca o muerte". *Documento de Debate Droga y Conflicto*. Lima, Abril, número 10, pp.16-26.

.

CICAD

2004 "Concepto de Desarrollo Alternativo" Consulta: el 04 de marzo del 2004.

< http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Alternativo/ESP/About.asp>

CARETAS

2001a, N 1659, marzo, 19.

2001b, N°1662, marzo, 12.

CORAH

2004 "Reducción del ámbito cocalero en el Perú en el año 2004".

Boletín Pura Selva. Lima. Ministerio del Interior.

DEGREGORI, Carlos Ivan

2000 *La Década de la Antipolítica*. Lima: IEP, 2000.

DEVIDA

2005 "Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002-2007"

Consulta: 15 de marzo del 2005. <www.devida.org>

DURAND, Anahí

2005 "Los (h)usos de la memoria y la crisis del movimiento social en San Martín". Lima: UNMSM.

JENKINS, Craig

1994 "La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos sociales". *Zona Abierta*. Madrid, 1994, número 69, pp. 5-49

FAVELA, Diana.

2008 "La estructura de oportunidades políticas de los movimientos

sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano". Versión resumida del capítulo teórico de la tesis doctoral, *Popular Protest and Policy Reforms in Mexico, 1946-1994*". Consulta: 10 de abril del 2008, <http://revistas.colmex.mx/revistas/8/art_8_728_4473.pdf>

FRANCKE, Pedro

- 1998** "Lucha contra la pobreza: presente y futuro". *Quehacer*. Lima, noviembre 1998-enero 1999, número 116, pp. 40-48

ZAS FRITZ, Johnny

- 2004** La insistencia de la voluntad: el actual proceso peruano de descentralización política y sus antecedentes inmediatos 1980-. 2004. Lima: Defensoria del Pueblo.

HAMOWY, Ronald

- 1991** *Tráfico y consumo de drogas: consecuencia de su control por el gobierno*. Madrid: Unión Editorial.

IBARRA, Pedro.

- 2005** *Sociedad Civil y movimientos sociales*. Madrid: Editorial, Síntesis.

INEI

- 1993** "Censos Nacionales: IX de población y IV de Vivienda", Lima, INEI,
1985 Boletín N°8.

MARTINEZ, Hector.

- 1988** "Migración y colonización en la selva y ceja de Selva". I Seminario de Investigaciones sociales en la Amazonia. Iquitos: CETA.

MUNICIPALIDAD DE PADRE ABAD

- 2004a** Plan Estratégico de Desarrollo Participativo y Concertado de la provincia del Padre Abad del 2004. Aguaytía.
2004b Sondeo Rural Rápido Talleres realizado para elaborar el Plan de Desarrollo de la provincia. Aguaytía.

MCCARTY, John y Mayer ZALD

- 1988** "Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory". *American Journal of Sociology*, Vol.82, Number 6, pp. 1212-1241

MCCLINTOCK, Cynthia y Fabián VALLAS

2000 *La democracia negociada: las relaciones Peru- Estados Unidos 1980-2000*. Lima: IEP.

MINISTERIO DEL INTERIOR

1991 "Proyecto Especial control y reducción del cultivo de coca en el Alto Huallaga –CORAH-". Lima: MININTER.

MELUCCI, Alberto

1999 *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: Colegio de Mexico.

NACIONES UNIDAS

1961 "Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes". New York.

Consulta: 05 febrero del 2005.

<<http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/drogas/docs.shtml>>

1988 Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas". Viena.

Consulta: 05 de febrero del 2005.

<<http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/drogas/docs.shtml>>

NEVEU, Eric

2000 *Sociología de los movimientos sociales*. Ecuador: Abya-Yala.

LINDBLOM, Charles

1991 *El proceso de elaboración de políticas Públicas*. Madrid: Ministerio para las Administraciones Públicas.

OLSON, Marcur

1992 *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Mexico, D.C, Limusa.

PIZARRO, Rosa; Laura TRELLES; Eduardo TOCHE

2004 "La protesta social durante el Toledismo". En: Azpur, Javier. *Perú Hoy: los mil días de Toledo*. Lima: DESCO, pp. 30-65.

REYNA, Carlos, Martin MONSALVE; Carlota CASALINO; Daniel PARODI

2004 *Los procesos electorales entre 1989-1995: problemas y elecciones* Lima: ONPE, 2004.

SOBERON, Ricardo

1997 "Entre cuarteles, caletas y fronteras...". *Cuadernos de Nueva Sociedad* N° 1. Segundo Semestre, pp. 81-88.

2007 *Hablan los diablos*. Lima: Transnational Institute.

SANCHEZ, José

2005 "Del conflicto social al ciclo político de la protesta". *Ecuador Debate*, número 64, 2005.

< <http://sala.clacso.org.ar> >

SCHIPANI, Andres

2008 "Organizando el descontento: movilizaciones de desocupados en la argentina y chile durante las reformas de mercado". *Desarrollo Económico* Vol. 48, n° 189, abril-junio, pp 85-117

SMELSER, Neil

1989 *Teoría del comportamiento colectivo*. México: Fondo de Cultura Económica.

TANAKA, Martin

1997 "Los espejos y espejismos de la democracia y el colapso de un sistema de partidos: Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada". Tesis para optar el grado de Doctor. FLACSO, Mexico.

2001 *Participación popular en políticas sociales; cuándo puede ser democrática y eficiente*. Lima: IEP.

2005 *Democracia sin partidos, Perú 2000-2005: los problemas de la representación y las propuesta de reforma política*. Lima: IEP.

TARRES, Maria

1992 "Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva". *Estudios Sociológicos*, Vol. X, N°30, pp735-757.

TARROW, Sidney

1994 *El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.

Transnational Institute

2008 "Informe sobre políticas de drogas N° 2, enero.2002". Consulta: 8 de enero 2008.

<www.tni.org>

TOCHE, Eduardo y Martín PAREDES

2006 *Perú Hoy: democracia inconclusa, transición y crecimiento*. Lima. DESCO.

TUESTA, Fernando

1999 *El juego político: Fujimori, la oposición y las reglas*. Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1999.

ZEGARRA, Eduardo

2004 *Estudio en Profundidad sobre el impacto de los Proyectos Productivos de Desarrollo Alternativo en Aguaytía*. Lima: GRADE.

ANEXOS

ANEXO 1: LISTADO DE ENTREVISTAS

Cargo	Código
Antropólogo de la zona	E1
Secretario de la Asociación cocalera de Aguaytía.	E2
Vicepresidente de la Asociación de cocaleros de Aguaytía.	E3
Coordinador de Jóvenes de la Asociación de la Asociación de cocaleros de Aguaytía.	E4
Secretario de economía de la Asociación de cocaleros de Aguaytía.	E5
Periodista de la zona.	E6
Delegado de la comunidad del caserío de Río Jordán.	E7
Comunero de la comunidad del Río Jordán.	E8
Ex presidente de la Asociación de cocaleros de Aguaytía.	E9
Presidente de la Asociación de plataneros de Aguaytía.	E10
Ex presidente de la Asociación de cocaleros de Aguaytía.	E11
Ex presidente de la Asociación de cocaleros de Aguaytía.	E12
Fundador del Partido Acción Popular en Aguaytía (*).	E13
Ex secretario de la Asociación de Cocaleros de Aguaytía (*).	E14

(*) Estas entrevistas fueron informales.

ANEXO 2: GRUPO FOCAL EN LA COMUNIDAD DE SHAMBILLO

Nombre	Educación	Edad	sexo	Permanencia en la zona	Tiempo en el PDA	Parcelas	cargo	código
Arcadio	Primaria Completa	45	M	1998	1	8Has.	Agricultor	GC1
Capchi	Secundaria Incompleta	34	M	1998	5	4Has.	Agricultor	GC2
Jorge	Primaria Incompleta	30	M	1990	1.		Vocal	GC3
X	Primaria incompleta	56	F	1989	2	10Has.	President a vaso de leche	GC4
Victorio	Secundaria completa	24	M	1980	3	9Has.	President e comunid ad	GC5
Airo	Secundaria incompleta	43	M	1979	1 s.	8Has.		GC6
Patricio	Primaria completa	26	M	1991		20Has.	Agente municipal	GC7
Nasario			M	1982			Teniente Goberna dor	GC8

ANEXO 3: GRUPO FOCAL EN LA COMUNIDAD DE HUICOCA

Nombre	Educación	Edad	sexo	Permanencia en la zona	Tiempo en el PDA	Parcelas	cargo	código
Acacio	Primaria incompleta	45	M	1998	1	20Has.	Agricultor	GH1
Bacilio	Primaria Incompleta	40	M	1995	5	15Has.	Agricultor	GH2
Romulo	Primaria Incompleta	60	M	1982	8	(+)	Dirigente de la Asociación de Palmicultores	GH3
Eduardo	Secundaria incompleta	56	F	1989	2	(+)	agricultor	GH4

(+) No han querido brindar información por temor

ANEXO 4: REGISTRO EN EL PERIODICO AHORA Y LA REPUBLICA

Periódicos/Re vista	Carácter	Fecha	Página	Códi go
Ahora	Entrevista	01 de julio del 2002	10	P1
Ahora	Entrevista	26 de febrero del 2003	4	P2
Ahora	Entrevista	17 de marzo del 2001	5	P3
Ahora	Entrevista	28 de febrero del 2001	5	P4
Ahora	Entrevista	11 de mayo del 2001	2	P5
Ahora	Entrevista	28 de junio del 2002	3	P6
Ahora	Entrevista	26 de febrero del 2003	5	P7
Ahora	Entrevista	27 de enero del 2004	6	P8
Ahora	Entrevista	25 de marzo del 2004	6	P9
Ahora	Entrevista	30 de marzo del 2004	4	P10
La República	Entrevista	12 de mayo 2004	10	P11
Ahora	Comunica do	21 de febrero del 2003	3	C1
Ahora	Comunica do	07 marzo del 2002	2	C2
Ahora	Comunica do	11 de mayo del 2001	2	C3
Ahora	Comunicado	6 de marzo del 2003	6	C4
Ahora	Hecho	12 de mayo del 2001	5	H1
Ahora	Hecho	11 de mayo del 2001	2	H2
Ahora	Hecho	17 de febrero del 2003	10	H3

Ahora	Hecho	21 de febrero del 2003	3	H4
Ahora	Hecho	25 de febrero del 2003	3	H5
Ahora	Hecho	22 de abril del 2004	3	H6
Ahora	Hecho	03 de mayo del 2004	6	H7

ANEXO 5: DOCUMENTOS

Tipo de documento	Carácter	fecha	Código
Acta de acuerdo	Reunión del Presidente de Contradrogas, Secretario Ejecutivo de Contradrogas, la Asociación de agricultores y productores de hoja de coca del Alto Huallaga, Valle del Monzón y Padre Abad, alcalde de Aucayacu y representantes de organismos de gobierno.	O2 de noviembre 2002	D1
Acta	Instalación de la Comisión de Erradicación en Aguaytía.	17 de noviembre 2000	D2
Oficio	Jefe de Unidad de Desarrollo Alternativo de DEVIDA envía oficio al congresista Aurelio Pastor Valdivieso sobre los petitorios de los cocaleros.	11 de diciembre 2002	D3
Expediente	En el Poder Judicial se tiene el documento con N°2002-073-240301-j-x11 por los hechos de violencia.		D4
Memorial	Documento dirigido a Nils Ericson de DEVIDA.	18 de julio del 2002	D5